



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS I

D.A.541/2023

N.P.1470/2023

RAJ.7505/2023

TJ/V-44613/2022

ACTOR: DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCDDMX

OFICIO No: TJA/SGA/I/-(7)3085/2024

Ciudad de México, a 04 de julio de 2024

ASUNTO: CERTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN

**LICENCIADO MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA TRECE DE
LA QUINTA SALA ORDINARIA DE ESTE H. TRIBUNAL
P R E S E N T E.**

Devuelvo a Usted, el expediente del juicio de nulidad número **TJ/V-44613/2022**, en **178** fojas útiles, mismo que fue remitido para sustanciar el recurso de apelación señalados al rubro, y en razón de que con fecha **OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, el pleno de la Sala Superior de este Tribunal emitió resolución en cumplimiento a la ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual fue notificada a **la autoridad demandada y a la parte actora el VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, y toda vez que ha transcurrido en exceso el término para que las partes interpusieran medio de defensa alguno (Amparo o Recurso de Revisión), con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, vigente al día siguiente de su publicación, el primero de septiembre de dos mil diecisiete en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y el artículo 15 fracción XIV del Reglamento Interior vigente a partir del once de junio de dos mil diecinueve, **se certifica** que en contra de la resolución del cumplimiento de ejecutoria de **OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, dictada en el recurso de apelación **RAJ.7505/2023**, en cumplimiento a la ejecutoria **D.A.541/2023**, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se observa a la fecha en los registros de la Secretaría General de Acuerdos I que se haya interpuesto algún medio de defensa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

**SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS I DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

JBZ/EGG

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

★ 10 JUL. 2024 ★

QUINTA SALA ORDINARIA
PONENCIA TRECE
RECIBIDO

23/05/10



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA 541/2023

RECURSOS DE APELACIÓN:

RAJ. 7505/2023.

JUICIO DE NULIDAD:

TJ/V-44613/2022.

PARTE ACTORA:

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

AUTORIDAD DEMANDADA:

DIRECTOR DE PRESTACIONES Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA CAJA DE
PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

APELANTE:

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

MAGISTRADA PONENTE:

DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA
HERNÁNDEZ TORRES.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:

LICENCIADO HERNÁN JOSUÉ RUÍZ
SÁNCHEZ.

Acuerdo del Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, correspondiente a la sesión
plenaria del día ocho de mayo de dos mil veinticuatro.

CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA de veintidós de marzo
de dos mil veinticuatro, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los autos del
juicio de amparo DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX promovido por DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 por propio derecho, parte actora en el juicio de nulidad
TJ/V-44613/2022, en contra de la resolución de cuatro de mayo de
dos mil veintitrés, pronunciada por este Pleno Jurisdiccional en el
recurso de apelación **RAJ. 7505/2023.**



RESULTANDO:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y ACTO IMPUGNADO. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el treinta de junio de dos mil veintidós,

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

por propio derecho, presentó demanda de nulidad, en la que señaló como acto impugnado el siguiente:

"ACTOS IMPUGNADOS:

A) El oficio número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintidós, emitido por el Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, mediante el cual da contestación a mi escrito de petición de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, en el que niega mi derecho al pago único extraordinario en efectivo (como concepto de vales de despensa que se le otorga al personal en activo) ejercicio de dos mil veintiuno, toda vez que manifiesta dicha prestación le corresponde únicamente a los trabajadores de la Policía que se encuentren en activo a la fecha, y que el reclamo de los vales no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado; asimismo, niega el incremento de mi pensión del DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX en virtud de que precisa que en la cláusula 3.3 de mi Acuerdo de Pensión se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, o bien en los porcentajes que sean determinados por Acuerdo del Órgano de Gobierno, de tal manera que el incremento de mi pensión fue conforme a lo autorizado por dicho cuerpo colegiado."

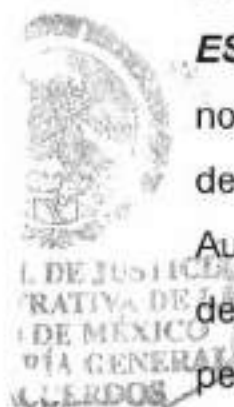
El acto impugnado consiste en el oficio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, a través del cual, se dio respuesta a su escrito de petición presentado ante la autoridad el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, informándole que, respecto al pago único extraordinario no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no obstante que se hayan invocado los Acuerdos DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX dado



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

que éstos sólo se refieren a una obligación de pago para años anteriores, y no así por lo que hace al pago del año dos mil veintiuno.

Asimismo, se le hizo de su conocimiento que por lo que hace al pago de vales de despensa del año dos mil veintiuno, existe un **"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021"**, normatividad que establece que es improcedente la reclamación del accionante, ya que únicamente los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentren en activo, percibirán el estímulo de fin de año que reclama, por lo que dicho pago no puede hacerse a los pensionados y jubilados.



De igual manera, se le hizo saber que, en cuanto a la adecuación del pago de su pensión, así como del incremento del 22% de la misma, la enjuiciada arribó a la conclusión de que la cláusula 3.3 del propio Acuerdo de pensión establece que su cuota pensionaria se incrementará en la misma proporción que se modifique el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, por lo que el incremento que solicita, se hará conforme lo autorice la Institución.

SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA Y REQUERIMIENTO. Por razón de turno, tocó conocer de demanda a la Magistrada Instructora de la Ponencia Trece de la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien mediante acuerdo de **cuatro de julio de dos mil veintidós**, admitió la demanda en **vía ordinaria**, tuvo por ofrecidas las pruebas de la parte actora y ordenó emplazar a la autoridad demandada para que produjera su contestación.



En el mismo acuerdo, se requirió a la parte actora para que en el término de cinco días hábiles, exhibiera ante la Sala, original o copia certificada de las probanzas señaladas en los numerales tres y cuatro del capítulo de pruebas de su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo, se le daría el valor probatorio que en derecho corresponda a las fotocopias que exhibe.

TERCERO. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO. Por auto de **doce de agosto de dos mil veintidós**, se tuvo por desahogado el requerimiento de cuatro de julio de dos mil veintidós por parte de la parte actora, dejando sin efectos el apercibimiento decretado.

CUARTO. CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y REQUERIMIENTO. A través de acuerdo de **diecisiete de agosto de dos mil veintidós**, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma por parte de la autoridad demandada, quien se pronunció respecto del acto controvertido, ofreció pruebas, planteó causales de improcedencia y defendió la legalidad del acto impugnado.

Asimismo, se le requirió para que en el término de cinco días hábiles, exhibiera ante la Sala, original o copia certificada de las probanzas señaladas en los numerales IV y V del capítulo de pruebas de su escrito de demanda, apercibida que de no hacerlo, se le daría el valor probatorio que en derecho corresponda a las fotocopias que exhibe.

QUINTO. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO. Por auto de **dos de septiembre de dos mil veintidós**, se tuvo por desahogado el requerimiento de diecisiete de agosto de dos mil veintidós por



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

parte de la autoridad demandada, quedando sin efectos el apercibimiento decretado.

SEXTO. VISTA PARA ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. A través de acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó a las partes el plazo legal de cinco días para formular alegatos por escrito y se precisó que transcurrido dicho término con o sin alegatos, quedaría cerrada la instrucción. Se destaca que las partes contendientes no ejercieron dicho derecho

SÉPTIMO. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El once de octubre de dos mil veintidós, se dictó sentencia al tenor de los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO.- No se sobresee el presente asunto por los razonamientos y fundamentos expuestos en el Considerando II.1 de este fallo.

SEGUNDO.- Se reconoce la validez del **oficio número** **de fecha veinticinco de mayo del** **2022**, por las consideraciones expuestas en la parte final del Considerando IV de este fallo.

TERCERO.- Se hace saber a las partes que en contra de la presente sentencia pueden interponer el recurso de apelación dentro de los diez días siguientes al que surta efectos la notificación.

CUARTO.- A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante la Magistrada Instructora, para que les explique el contenido y los alcances de la presente resolución.

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido."

La Sala del conocimiento, reconoció la validez del oficio impugnado, al considerar que el pago de la gratificación

117



extraordinaria del ejercicio dos mil veintiuno equivalente al concepto de vales de despensa, que recibe el personal activo de la Policía Auxiliar, solicitada por el accionante, por considerar que la parte actora no tiene acceso al mismo, al haber causado baja de la Corporación en el dos mil diecisiete.

Asimismo, consideró que, resulta correcto que el incremento de la pensión del actor se realice con base en los aumentos que ha sufrido la Unidad de Medida y Actualización, ya que, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, todas las referencias al salario mínimo, como parámetro de medida para fines diversos al laboral, deben considerarse efectuados a la Unidad y Medida de Actualización.

OCTAVO. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Inconforme con la referida sentencia, el **dos de febrero de dos mil veintitrés,** DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPR

por conducto de su autorizada,

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 L

interpuso recurso de apelación, de conformidad y en términos de lo previsto en el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

NOVENO. ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por auto de la Presidencia de este Tribunal y de su Sala Superior, dictado el **trece de marzo de dos mil veintitrés,** se admitió el Recurso de Apelación **RAJ. 7505/2023,** se turnaron los autos a la Magistrada **DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES,** y con las copias exhibidas de ordenó correr traslado a la contraparte, en términos del artículo 118, tercer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

DÉCIMO. RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. El catorce de abril de dos mil veintitrés, se recibieron los autos del juicio de nulidad y del recurso de apelación que se trata en la Ponencia Cinco de la Sala Superior.

DÉCIMO PRIMERO. APROBACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. En sesión plenaria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno Jurisdiccional de este Tribunal aprobó por mayoría de votos, la resolución al recurso de apelación de cuenta con los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO. Resultaron *inoperantes e infundados* los agravios hechos valer por la parte recurrente en el recurso de apelación **RAJ. 7505/2023**, de conformidad con los motivos y fundamentos precisados en el Considerando **SEXTO** de este fallo.

SEGUNDO. Se **CONFIRMA** la sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional de este Tribunal, en el juicio número **TJ/V-44613/2022**.

TERCERO. Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se les hace saber a las partes que en contra del presente fallo podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo.

CUARTO. A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda, las partes pueden acudir ante la Magistrada Ponente, para que se le explique el contenido y los alcances de la presente sentencia.

QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes y por oficio acompañado de copia autorizada del presente fallo, devuélvase a la Sala de origen el expediente del juicio **TJ/V-44613/2022**, y en su oportunidad, archívense los autos del recurso de apelación **RAJ. 7505/2023** como asunto total y definitivamente concluido."

DÉCIMO SEGUNDO. INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Inconforme con la resolución del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pronunciada en el recurso de apelación RAJ. 7505/2023, parte actora, promovió juicio de amparo directo, el cual por razón de turno, correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCDDMX

TJ-V-44613/2022



Administrativa del Primer Circuito, en donde se registró con el expediente D.A. 541/2023, el cual fue resuelto en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, en el que se le amparó y protegió a la parte actora, al tenor de los puntos resolutive siguientes:

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO. Fundamentación de la competencia de este tribunal. Este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero, quinto y sexto, 103, fracción I y 107, fracciones I, III, inciso a, V, inciso b, y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34 y 170 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso b) y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con apoyo además en los puntos PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I y TERCERO, fracción I, del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.", porque se trata de un juicio de amparo directo en el cual se reclama una sentencia dictada por un tribunal contencioso administrativo, con residencia en este circuito.

9. SEGUNDO. Estudio de la temporalidad en la presentación de la demanda. La demanda de amparo se presentó en el plazo de quince días que refieren los artículos 17 y 19 de la Ley de Amparo, así como en términos del "Aviso por el cual se dan a conocer sus días inhábiles y periodos vacacionales correspondientes al año 2023", de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiocho siguiente, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos "I" Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad.

Lo que se ilustra mediante los cuadros siguientes:

JUNIO 2023						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15 a)	16 b)	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULIO 2023						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
					1	2
3 c)	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

a) Día en que se notificó la sentencia reclamada a la parte quejosa (personalmente).¹

b) Fecha en que surtió efectos la notificación.²

c) Data en que se presentó la demanda de amparo.

☐ Plazo para promover el juicio de amparo.

 Días inhábiles.

10. **TERCERO. Estudio de la legitimación.** La demanda de amparo fue promovida por parte legítima, pues la presentó la parte actora en el juicio contencioso administrativo de origen, quien resiente directamente sus efectos; y, por ello, debe ser reconocida como parte quejosa en términos del artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo.

11. **CUARTO. Certeza del acto reclamado.** La existencia del acto reclamado se acreditó con el informe justificado que rindió la autoridad responsable, así como con los autos que al respecto adjuntó.

12. QUINTO. Material de apoyo para el estudio respectivo. Colmados los presupuestos procesales destacados con anterioridad, se reúnen las condiciones para el correspondiente pronunciamiento, por lo tanto, adjunto al proyecto respectivo, el magistrado relator entrega a las ponencias de este tribunal colegiado, vía electrónica, los archivos digitales de la demanda de amparo y de la sentencia reclamada, además, se ordena que en su oportunidad se integre copia certificada de esta última a los autos del presente juicio de amparo.

13. **SEXO. Antecedentes.** Previo a analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se deben tener presentes los antecedentes del acto reclamado, a saber:

- ❖ **Otorqamiento de pensión.**

El trece de diciembre de dos mil diecisiete la quejosa y la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México celebraron el Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio por virtud de la cual el ahora quejoso adquirió la calidad de pensionado de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad México.

Asimismo, en su cláusula 3-3, se determinó que **la pensión se otorgaría a partir del dos de octubre de dos mil diecisiete**, y se incrementaría en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo en la Ciudad de México.

❖ *Escrito de petición.*

Posteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Control de Gestión de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, el ahora quejoso solicitó a la Dirección General de la Caja de Previsión:

a) El pago de gratificación extraordinaria de fin de año, en cantidad de **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** correspondiente al año dos mil veintiuno.

b) Se revoque la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización, y en consecuencia, el aumento de su pensión en un **DATO PERSONAL** conforme al incremento al salario mínimo de esta ciudad.

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Mediante oficio de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar dio contestación a la anterior petición en el sentido de negar la solicitud por las razones que al efecto expuso.

❖ Juicio de nulidad.

El ahora quejoso presentó demanda de nulidad contra ese oficio, 5 de la que correspondió conocer a la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la radicó con el folio TJ/V-44613/2022 y la admitió a trámite.

Seguido el procedimiento correspondiente, el once de octubre de dos mil veintidós esa Quinta Sala resolvió reconocer la validez del acto impugnado.

Contra esa anterior resolución, la parte actora interpuso recurso de apelación, siendo que mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México confirmó el fallo recurrido, en la parte que interesa para este asunto, con base en las consideraciones siguientes:

➤ Considerando IV.

- Primeramente analizó una parte del agravio segundo, en relación con los diversos tercero, cuarto y quinto, los que calificó de inoperantes debido a que con ellos no controvierte lo resuelto por la Sala Ordinaria, esto es:

- Que no es procedente el pago extraordinario que solicitó (vales de despensa dos mil veintiuno).

- Que es correcto que el incremento de su pensión se realice con base en la Unidad de Medida y Actualización, pues a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis todas las referencias al salario mínimo deben realizarse con base en esa unidad.

- De igual forma, consideró inoperante la otra parte del agravio segundo puesto que la parte apelante no precisó qué argumentos y pruebas son las que la Sala Ordinaria dejó de analizar, por lo que no estaba en aptitud de abordar el estudio correspondiente, con base en la jurisprudencia: "AGRAVIOS EN AMPARO. CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE VALORAR ALGUNA PRUEBA, BASTA CON



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

MENCIONAR CUÁL FUE ÉSTA PARA QUE EL TRIBUNAL ESTUDIE LA ALEGACIÓN RELATIVA, SIENDO INNECESARIO EXPONER SU ALCANCE PROBATORIO Y CÓMO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO."

- Finalmente estudió el primer agravio en el que el accionante sostuvo que el pago de fin de año y el incremento de su pensión en un 22% constituyen derechos adquiridos, y lo estimó infundado, con base en que:
 - ✚ El apartado Cuadragésimo quinto del "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el estímulo de fin de año (vales) ejercicio 2021" establece que todas las reclamaciones que realice el personal que cause baja, entre otras cosas, por pensión, serán improcedentes.
 - ✚ El oficio impugnado está debidamente fundado y motivado, y la petición fue debidamente atendida, de manera completa y coherente, ya que la autoridad indicó que el pago extraordinario solicitado no está regulado en ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja.
 - ✚ Del punto Décimo segundo del citado acuerdo se conoce que el pago de vales de fin de año para el ejercicio dos mil veintiuno sólo se otorgará a los trabajadores en activo, con independencia de que en años anteriores se le haya otorgado esa prestación.
 - ✚ No se transgrede el derecho de petición porque la respuesta impugnada reúne los requisitos necesarios para considerar que la autoridad satisfizo ese derecho, aunado a que no existe obligación de resolver favorablemente a los intereses del gobernado.
 - ✚ Con base en la reforma constitucional de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el monto límite de su pensión debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización, pues el hecho de que en su acuerdo de pensión se haya establecido que ésta se incrementaría con base en el salario mínimo, no significa que ello debe realizarse así para siempre, por lo que no es un derecho adquirido, siendo aplicables los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), cuyos rubros son los siguientes:
 - a) PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.
 - b) PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

14. SÉPTIMO. Conceptos de violación. En el presente considerando, se sintetizan los conceptos de disenso formulados por la parte quejosa, en los que dice:

➤ **Primero:**

Que la sentencia reclamada transgrede el principio de progresividad que ordena ampliar el alcance y protección de los derechos humanos.

Dice lo anterior porque en los años dos mil dieciocho a dos mil veinte recibió el pago extraordinario de vales de despensa, siendo que para el año dos mil veintiuno se suspendió esa prestación; de ahí que se trata de un derecho adquirido.

➤ **Segundo:**

Ahí afirma que es inviable que en la sentencia reclamada se haya determinado como correcto que su pensión se otorgue con base en la Unidad de Medida y Actualización, puesto que el beneficio pensionario lo adquirió en dos mil diecisiete, por lo que no le son aplicables los criterios jurisprudenciales ahí citados; aunado a que éstos se emitieron con posterioridad a su pensión, por lo que existe una aplicación retroactiva.

Máxime que con base en el Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX se estableció como acuerdo de voluntades, que su pensión se incrementaría en la misma proporción que se modifique el salario mínimo mensual en la Ciudad de México.

Aduce que se transgredió en su perjuicio el artículo 17 constitucional, con base en el cual puede acudir a los tribunales a fin de que se le administre justicia conforme a los plazos y términos establecidos en la ley.

Finalmente, solicita se supla en su favor la deficiencia de la queja.

15. OCTAVO. Estudio. Precisado lo anterior, se procede a analizar los motivos de disenso propuestos por la parte quejosa; estudio que se llevará a cabo en un orden diverso al propuesto, por temas, y en algunos casos de manera conjunta dada su vinculación; lo anterior por técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

I. Transgresión al principio de progresividad.

16. En la primera parte del concepto de violación primero propone que se viola dicho principio.

17. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ese principio, reconocido en el artículo 1 constitucional, rige en materia de los derechos humanos y en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

18. Dijo que, en su connotación positiva, ese principio impone al aplicador jurídico, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen los derechos, mientras que, en su sentido negativo, impone una prohibición de



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

regresividad, esto es, que el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera que se les atribuya un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.

19. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

20. Como se ve, el principio de progresividad está relacionado con la protección de derechos humanos, por lo que si la quejosa sostiene que la autoridad transgrede ese principio, está obligada a indicar qué derechos humanos son los que la autoridad responsable interpretó en un sentido que haya desconocido su extensión y/o su nivel de tutela admitido previamente, lo que no sucedió.

21. Por ende, este tribunal no cuenta con elementos para analizar si en la sentencia combatida se realizó una interpretación de derechos humanos que desconozca su nivel de tutela admitido con anterioridad; por lo que lo procedente es declararlo **inoperante**.

II. Acceso a la justicia

22. En una parte del **segundo argumento de disenso** manifiesta que se transgrede en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional.

23. Al respecto, el segundo párrafo de ese precepto constitucional reconoce:

"Artículo 17. (...)

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
(...)"

24. La Primera Sala del Supremo Tribunal del País al pronunciar la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), 7 de título "**DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN**", determinó que el derecho de tutela jurisdiccional es el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión.

25. Asimismo, estableció que ese derecho comprende las etapas siguientes:



- a. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte.
- b. Una judicial, que comprende el trámite del juicio y que se relaciona con el derecho al debido proceso.
- c. Una posterior al juicio, que corresponde a la ejecución del fallo.

26. De igual forma, la misma Sala, al resolver el amparo directo en revisión DATO PERSONAL ART.186 LT determinó que:

- Para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que previamente se advierta que no existen impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.

- Es constitucionalmente válido que el poder legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá distintos requisitos de procedencia que se deberán cumplir para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, los cuales consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución.

- De tal manera que, a falta de esos requisitos se actualiza la improcedencia de una acción.

27. Lo que derivó en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), 8 de título y subtítulo siguientes: **"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN."**

28. Como se ve, el derecho de acceso a la justicia se refiere a la posibilidad que tienen los gobernados de acudir, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a los tribunales a fin de que resuelvan las pretensiones que aquéllos les plantean, y, en su caso, se ejecute el fallo emitido.

29. Asimismo, que ese derecho está sujeto al cumplimiento de distintos requisitos de procedencia para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, de lo contrario se actualiza la improcedencia de la acción.

30. Por consiguiente, el derecho en estudio no implica que las pretensiones de los gobernados sean resueltas favorablemente a sus intereses, sino únicamente que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios para acudir a los tribunales y, en ese contexto, no le asiste razón a la parte quejosa pues en el supuesto de no obtener una sentencia favorable, no implica una denegación de justicia.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

31. Además, este tribunal no advierte la existencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios que hayan imposibilitado a la quejosa ejercer ese derecho, por el contrario, la quejosa acudió al Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad a demandar la nulidad del oficio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se resolvió su pretensión (aunque no de manera favorable a sus intereses), aunado a que acude a esta instancia constitucional a defender los derechos humanos que estima violados con la emisión de la sentencia reclamada.

32. Incluso, si ya tuvo oportunidad de que su reclamo fuera analizado en la sede contencioso administrativa local, ello es claro reflejo de que estuvo en posibilidad de ejercer su derecho al acceso a la impartición de justicia; ello con independencia de que el fallo ahí dictado le resulte o no benéfico; por lo tanto, lo expresado es **infundado**.

III. Irretroactividad de la jurisprudencia.

33. Respecto de lo alegado en la primera parte de su segundo concepto de violación (en el sentido de que las jurisprudencias que sustentan el fallo reclamado se aplicaron retroactivamente), es oportuno tener presente que al emitir la jurisprudencia 2a./J. 199/20169 de rubro: "**JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUELLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO**", la Segunda Sala del Alto Tribunal, determinó que la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, a condición de que esa aplicación no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de personas.

34. Tal aplicación retroactiva se actualiza, entre otros supuestos, cuando al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguno de los aspectos jurídicos relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional.

35. Así, este órgano colegiado llega a la convicción de que en el caso en concreto no se aplicaron retroactivamente las jurisprudencias siguientes:

1. 2a./J. 30/2021 (10a.), de rubro: "**PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.**"

2. 2a./J. 37/2022 (11a.), de título: "**PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.**"

36. Ello, en virtud de que previo a su emisión no existía un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interpretara la misma hipótesis jurídica en sentido contrario, esto es, que tanto el aumento de la pensión como su monto máximo deben calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no el salario mínimo.

37. Por consiguiente, la aplicación de esos criterios jurisprudenciales no es violatoria del principio de irretroactividad y, por el contrario, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son obligatorias tanto para la autoridad responsable como para este tribunal colegiado, por lo que no es jurídicamente posible excluir su aplicación al caso concreto; de ahí, que el razonamiento examinado resulte **infundado**.

IV. Pago de estímulo de fin de año (vales).

38. En la segunda parte de su **primer razonamiento de disconformidad** afirma que la sentencia reclamada transgrede el principio de progresividad que ordena ampliar el alcance y protección de los derechos humanos, porque en los años dos mil dieciocho a dos mil veinte recibió el pago extraordinario de val es de despensa, siendo que para el año dos mil veintiuno se suspendió esa prestación; de ahí que se trata de un derecho adquirido.

39. Con base en ello, este tribunal estima que la pretensión de la parte quejosa es demostrar que sí tiene derecho al pago de vales de despensa para el año dos mil veintiuno, por tratarse de un derecho adquirido.

40. A fin de dar la respuesta que en derecho corresponda, conviene transcribir los artículos tercero, décimo primero, décimo segundo y cuadragésimo quinto del citado acuerdo, así como el punto 7.3 del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal:

"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021 TERCERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el otorgamiento del estímulo de fin de año VALES ejercicio 2021, para los trabajadores al servicio de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, que rigen su relación jurídica laboral en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123, Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, para el personal de Haberes, que se regula en el marco de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y en su caso para aquellos Órganos Autónomos que voluntariamente deseen adherirse a la compra consolidada de vales; independientemente de que este estímulo se encuentre establecido en Contratos Colectivos, Condiciones Generales de Trabajo y/o Lineamientos, en los diferentes Órganos de la Administración Pública.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL DE HABERES, DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, POLICÍA PREVENTIVA Y POLICÍA AUXILIAR, Y DEL PERSONAL DE BASESINDICALIZADO Y DE LISTA DE RAYA BASE SINDICALIZADO NO AGREMIADOS AL SUTGCDMX



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

DÉCIMO PRIMERO. El GCDMX otorgará el estímulo de fin de año VALES ejercicio 2021, a través de los titulares de los Órganos de la Administración Pública, al personal de Haberes de la Policía y al personal de Base Sindicalizado y Lista de Raya Base Sindicalizado, No agremiado al SUTGCDMX, cuyas remuneraciones sean cubiertas con cargo al Capítulo 1000 "Servicios Personales" de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México.

DÉCIMO SEGUNDO. El estímulo de fin de año VALES ejercicio 2021, será proporcional a los días laborados por el trabajador en el Órgano de la Administración Pública de su adscripción actual, considerando que la actual Unidad de adscripción será la responsable de dar cumplimiento a lo señalado en los presentes Lineamientos.

Para efectos del cálculo del presente estímulo, se entenderá como periodo completo, el comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del ejercicio 2021, debiéndose encontrar laboralmente activo en la plaza y puesto de trabajo para esta última fecha, y se hará conforme a la tabla que se adjunta a los presentes Lineamientos, identificada como Anexo Dos.

CAPÍTULO IX DE LA RECLAMACIÓN

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja por renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de nombramiento, término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total permanente, al igual que el que se encuentre con licencia sin goce de sueldo o suspendido de sus derechos en las fechas establecidas para tal fin, en los presentes Lineamientos.

PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL

7.3 Pensiones Descripción: El otorgamiento de pensiones a los integrantes de la Policía Auxiliar constituye una garantía y protección a sus remuneraciones, contribuyendo a mantener su nivel de vida personal y familiar. Asimismo, el pago de gastos en caso de fallecimiento representa un apoyo a los derechohabientes de la Corporación.

Objetivos: Establecer las reservas actuariales y un régimen financiero que garantice la cobertura oportuna y equitativa de las pensiones, servicios y prestaciones que debe otorgar la Caja de Previsión. Procurar que los pensionados gocen de las mismas prestaciones y servicios que disfrutaban los elementos en activo."

41. De lo transcrito se obtiene lo siguiente que:

- El estímulo denominado "VALES ejercicio 2021" está **dirigido a los trabajadores** al servicio de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México y que se otorgó, de forma proporcional, de acuerdo a los días laborados en el periodo comprendido del uno de enero al treinta de noviembre del mencionado año.



- Se impuso una condición para su otorgamiento, que consiste en que los trabajadores se encuentren en **servicio activo**.

- Las reclamaciones que al respecto realicen los pensionados eran improcedentes.

- Que el otorgamiento de pensiones a los integrantes de la Policía Auxiliar es una garantía y protección a sus remuneraciones con el fin de mantener su nivel de vida personal y familiar, para lo que se deben establecer las reservas actuariales y un régimen financiero que garantice su cobertura oportuna y equitativa, **procurando** que los pensionados gocen de las mismas prestaciones y servicios que disfrutaban los elementos en activo.

42. En el caso, conforme lo disponen los artículos decimosegundo y cuadragésimo quinto del acuerdo por el que se otorga el pago del estímulo que la ahora quejosa solicita, se obtiene que no le asiste razón puesto que **no tiene derecho al pago del estímulo de fin de año (vales) del ejercicio dos mil veintiuno** debido a que esa prestación únicamente se estableció en favor del personal en activo, por lo que si la parte quejosa adquirió desde dos mil diecisiete la calidad de pensionado, es claro que no se ubica en el supuesto a que se refieren dichas normas.

43. En el entendido que si bien es cierto que el punto 7.3 del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal se ordenan medidas a fin de que el Estado garantice que el otorgamiento de las pensiones a los integrantes de la Policía Auxiliar les permita mantener su nivel de vida personal y familiar, y que se procure que los pensionados gocen de las mismas prestaciones y servicios que disfrutaban los elementos en activo, esta prerrogativa no es suficiente para inobservar lo dispuesto en los lineamientos que rigen el otorgamiento del estímulo de fin de año (vales) para dos mil veintiuno.

44. A similar conclusión llegó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 458/2011, en la que examinó si los jubilados conforme a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que pertenecieron al sistema educativo estatal, tienen derecho a que la gratificación anual que les corresponde, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de esa ley, se les incremente en igual número de días al que reciben los trabajadores en activo del sistema educativo estatal del que formaron parte.

45. Ahí indicó que atendiendo al citado precepto, los pensionados conforme a la mencionada ley tienen derecho al pago del aguinaldo anualmente en igual número de días que los concedidos a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión.

46. Explicó que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado y deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria que pudiera regir a los trabajadores en activo de la dependencia o entidad para la que laboró, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación.

47. Determinó que los beneficios que pudieran derivar de cualquier otra disposición legal, incluso de algún decreto expedido por el ejecutivo local, para los trabajadores en activo del sistema estatal de educación, no surten efectos



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



a favor de los jubilados, cuyas prestaciones no se rigen por aquellos ordenamientos.

48. Concluyó que el hecho de que a los trabajadores en activo de dicho sistema educativo se les incremente el número de días que reciben por concepto de gratificación anual o aguinaldo no beneficia a quienes laboraron en ese sistema de educación y se jubilaron en los términos precisados.

49. Esos razonamientos están plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 41/2012, 10 que establece.

TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, JUBILADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57. Para determinar la compensación anual a que se refiere el citado precepto, debe tenerse en cuenta que los "trabajadores en activo" a los que alude, son los trabajadores de la Administración Pública Federal; por tanto, si estos últimos reciben por concepto de gratificación anual el número de días previsto en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ese es el número de días que deben recibir por concepto de gratificación anual quienes, perteneciendo al Sistema Educativo Estatal, hayan sido jubilados conforme a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de algún convenio de incorporación de los previstos en sus artículos 146 y 147, salvo que en dicho instrumento se hubiera pactado un pago adicional a cargo del Gobierno Federal.

50. Con base en lo expuesto, este tribunal de amparo estima que el citado criterio si bien se refiere al sistema de pensiones previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cierto es que es aplicable, por identidad de razón, al sistema de pensiones previsto en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

51. De ahí que si las prestaciones de los pensionados se rigen por las disposiciones que les son aplicables y no conforme a las vigentes a los trabajadores en activo, se obtiene que el "Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el estímulo de fin de año (vales) ejercicio 2021" únicamente rige a estos últimos, sin que pueda aplicarse por extensión, identidad de razón o analogía a las personas que gozan de una pensión.

52. De manera que, contrario a lo que pretende la quejosa, se insiste, no es jurídicamente viable concederle una prestación extraordinaria que tiene sustento en una disposición que solamente aplica a los trabajadores en activo, ya que la parte quejosa está sujeta a los ordenamientos que regulan a los pensionados, como son las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal porque el demandante causó baja por jubilación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en que tampoco se prevé el pago de ese estímulo.

53. Tampoco es válido alegar que se trata de un derecho adquirido, en virtud de que como acertadamente lo precisó la responsable, la quejosa no acredita que en años anteriores haya recibido dicha prestación extraordinaria

TJ/V-44613/2022
RAJ. 7505/2023
24 de octubre de 2024

y, en el supuesto sin conceder que así haya sido, tampoco podría considerarse como una prerrogativa adquirida, con base en que su otorgamiento para el año dos mil veintiuno, únicamente está previsto para los funcionarios en activo, no así para los pensionados; consecuentemente, **es infundado** lo analizado.

V. Incremento de pensión.

54. En la **primera parte de su segundo concepto de violación** la parte quejosa afirma que es inviable estimar correcto que su pensión se otorgue con base en la Unidad de Medida y Actualización, puesto que el beneficio pensionario lo adquirió en dos mil diecisiete, siendo así inaplicables los criterios jurisprudenciales ahí citados; aunado a que éstos se emitieron con posterioridad a su pensión, por lo cual existe una aplicación retroactiva; máxime que con base en el Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX se estableció como acuerdo de voluntades, que su pensión se incrementaría en la misma proporción que se modifique el salario mínimo mensual en la Ciudad de México.

55. Argumentos que se examinarán en los siguientes subapartados.

5.1. Incremento de la pensión con base en la Unidad de Medida y Actualización.

56. Al respecto, es oportuno transcribir la cláusula 3.3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX y el artículo 27 de las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México:

"3.3 "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo en la Ciudad de México.

Artículo 27. La cantidad que perciban los pensionistas en cada caso, será la base para aplicar los porcentajes de incremento cuando se concedan aumentos generales a los sueldos básicos de los elementos activos."

57. De lo anterior se sabe que la parte quejosa tiene derecho a que se incremente su pensión en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo de la Ciudad de México, así como que dicho convenio se suscribió en diciembre de dos mil diecisiete; además, la cantidad que perciban los pensionistas será la base para aplicar los porcentajes de incremento para el caso de que los sueldos básicos de los elementos activos perciban algún aumento.

58. La litis en este punto se centra en determinar si es correcto que el incremento de la pensión de la parte quejosa se realice con base en la Unidad de Medida y Actualización (como se estableció en la sentencia reclamada), a pesar de que en el acuerdo por el que recibió su beneficio se haya pactado que se llevará a cabo en la medida que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.

59. Para ello, es importante recordar que en la sentencia reclamada se determinó:



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Con base en la reforma constitucional de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el monto límite de su pensión debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización, pues el hecho de que en su acuerdo de pensión se haya establecido que ésta se incrementaría con base en el salario mínimo, no significa que ello debe realizarse así para siempre, por lo que no es un derecho adquirido, siendo aplicables los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), cuyos rubros son los siguientes:

- a) PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.
- b) PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

60. Sin embargo, sin prejuzgar sobre la aplicabilidad de dicho criterio al aumento anual en su cuantía de las pensiones de los miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, este tribunal no inadvierte que el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados y estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial únicamente respecto de aquellos asegurados a los que con posterioridad al decreto de reformas se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

61. Para demostrarlo, importa tener presente la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 200/2020, donde la Segunda Sala del Alto Tribunal examinó el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada a la luz de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo general, publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor a partir del veintiocho de enero de la citada anualidad, en donde sostuvo lo siguiente:

- ✓ Si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa, no a la laboral.
- ✓ El monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo y, por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

- ✓ El monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al Instituto con un salario superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, por lo que esa interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional, razón por la que, de considerar que el tope de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría -en todo caso- en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.
- ✓ No podría considerarse que el hecho de sustituir el valor del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización genere una afectación a los asegurados, pues -por una parte- tanto su salario de cotización, como el tope de las pensiones tienen un límite máximo que es equivalente y -por otra parte- tampoco impide que los asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían recibiendo, si se tiene presente que antes de la implementación de la mencionada reforma, el monto máximo de las pensiones y del salario de cotización se calculaba con base en un salario mínimo que aumentaba en un porcentaje menor al crecimiento inflacionario.
- ✓ Aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido.

62. Estas consideraciones dieron lugar a la tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), 11 de rubro y texto siguientes:

PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA D.A.541/2023
 RECURSO DE APELACIÓN: RAJ. 7505/2023
 JUICIO DE NULIDAD: TJ/V-44613/2022
 - 23 -



Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México

en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.

Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social

a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.

63. Las narradas consideraciones revelan que la superioridad determinó que la reforma constitucional en materia de desindexación es aplicable a los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

64. En ese sentido, atendiendo a que la problemática planteada se analizó en relación con el régimen de jubilaciones previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y el que corresponde al artículo Décimo Transitorio de la Ley vigente, es inconcuso que al considerar el ordenamiento legal abrogado, el estudio contempló las pensiones otorgadas con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo.

65. Y si bien el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados, lo cierto es que estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial **únicamente** respecto de aquellos asegurados a los que **con posterioridad al decreto de reformas** se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

66. Posteriormente, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 310/2021, examinó el tema de si los incrementos en la cuantía de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio o bien es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo, en el contexto del contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y llegó a las siguientes consideraciones:

"53. ... el legislador, en distintos momentos ha reconocido que la cuantía de las pensiones debe aumentarse anualmente y para ello, ha establecido diversas fórmulas para el cálculo de esos incrementos, respecto de los cuáles, debe tomarse en cuenta que esta Segunda Sala(13) ha sostenido que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse y que únicamente quienes se pensionaron con anterioridad al uno de enero de dos mil dos, es decir, del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al salario mínimo. Sin embargo, a partir del veintiocho



de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, todas las referencias que los cuerpos normativos hagan a tal concepto deben ser entendidas a la UMA, de ahí que, a partir de la mencionada fecha, los incrementos a dichas pensiones deben calcularse con base en la referida unidad de medida.

54. Lo anterior en virtud de que los aumentos de referencia tienen como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los titulares de las pensiones y, por tanto, ajenos a la materia de trabajo; ya que, si bien es cierto son consecuencia de la existencia de una pensión previamente otorgada, no pueden constituir un derecho adquirido en atención a su origen.

55. Es por lo que resulta de especial relevancia establecer la forma en que los operadores jurídicos deben calcular la cuantía de los incrementos anuales en la pensión de los trabajadores.

56. Para tales efectos, el artículo 123 constitucional garantiza a los trabajadores un ingreso mínimo que sea suficiente para que quien sea el soporte económico de una familia pueda satisfacer las necesidades básicas de ésta. Dicho concepto ha sido reconocido, en diversos precedentes por esta Sala Constitucional, como integrante del ámbito laboral.

57. Asimismo, en ese precepto constitucional, pero en su apartado B, fracción XI, inciso a), se salvaguarda el derecho de los trabajadores a obtener una pensión jubilatoria; ello toda vez que se determina que la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que señala, esto es: "Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte".

58. Empero, necesariamente debe puntualizarse, ese derecho a la jubilación es una expectativa de derecho. Esto significa que, para obtener el beneficio, el trabajador está condicionado a prestar sus servicios por el lapso mínimo señalado.

59. Es decir, si no reúne los requisitos legales para acceder a tal prerrogativa, en modo alguno puede afirmarse que adquirió ese derecho, esto es, mientras no se actualicen las hipótesis de efecto condicionado, en el caso, reunir los años de servicio y edad, el trabajador no podrá considerarse u ostentarse como titular del beneficio derivado de la relación laboral, puesto que es hasta ese momento cuando esa prerrogativa se integra a su esfera jurídica y, por tanto, considerarse un derecho adquirido.

60. Lo anterior, se concluye, en atención a que se trata de una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente.

61. Sin embargo, las consecuencias o derivaciones con motivo del otorgamiento de la pensión, entre ellos el aumento o actualización del monto de la pensión es de diversa naturaleza; como se dijo antes, la razón de su existencia es evitar que la pensión pierda su poder adquisitivo por el paso del tiempo como

lo reconoció la Organización Mundial del Trabajo en el convenio 102 que en su artículo 65(14) establece la necesidad de la revisión de los montos cuando se produzcan variaciones en el costo de la vida.

62. En este sentido, al resolver la contradicción de tesis 200/2020, esta Sala apuntó que los aspectos vinculados con la indebida cuantificación de una pensión pertenecen a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación; asimismo que la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza".

63. En esta línea argumentativa y dado que el aumento anual en el monto de la pensión tiene como nota esencial el mantener el poder adquisitivo de su titular ante el costo de la vida, esto es, se ubica en la esfera del derecho administrativo y no en la materia de trabajo por lo que, se sigue que únicamente constituye una medida de referencia y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, el concepto de salario mínimo establecido en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE (abrogada), en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.

64. Se insiste, lo anterior encuentra sustento en que la finalidad es que el trabajador no pierda su poder adquisitivo, aspecto que no garantiza el salario mínimo ya que, como lo advirtió el Constituyente –durante las sesiones en que se discutió la reforma constitucional en materia de desindexación– el salario mínimo ya no cumple con esa función social de satisfacer al menos las necesidades básicas de la población mexicana.

65. Aunado a que con la aprobación de esa modificación constitucional se pretendió mejorar y recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y con ello, permitir que los ingresos de las y los trabajadores sean acordes con la nueva realidad de una economía dinámica que atienda todas y cada una de las necesidades de la clase trabajadora.

66. Incluso, robustece esta decisión, el hecho de que, en determinado momento, tanto en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE(15) como en el 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, el legislador haya hecho referencia como parámetro para el cálculo del incremento de la pensión el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que éste es un indicador diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta

ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias de México. (16)

67. En suma, dado que el aumento anual de la pensión no configura un derecho previamente adquirido con motivo del otorgamiento del beneficio constitucional al tener como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo, se sigue que constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

68. Consecuentemente, si bien es cierto que el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, establecía que las pensiones debían aumentarse con base en los aumentos al salario mínimo, lo cierto es que dichos incrementos constituyen una mera expectativa de derecho que se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida, de modo que a partir de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, dichas pensiones deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización..."

67. De estas consideraciones surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), 12 de rubro y texto siguientes:

PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si para efecto de calcular el incremento de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el aumento anual en la cuantía de las pensiones otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.

Justificación: Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de quien sea el soporte económico de una familia y en concordancia con la línea argumentativa sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.", se concluye que el aumento anual de la cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ello, en atención a que el incremento o actualización de su importe es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional; asimismo, con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del pensionado.

68. Como se observa, el Alto Tribunal examinó de nueva cuenta la ejecutoria que dio lugar a la citada tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), y sostuvo que el incremento o actualización del importe de la pensión es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, constituyendo una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida, por lo cual, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, entonces a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

69. De acuerdo con las citadas jurisprudencias - 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.) - de observancia obligatoria para la sala responsable y para este tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye que si bien derivado del otorgamiento de una pensión jubilatoria la previsión legal permite que la misma se incremente anualmente, este aspectos constituyen una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

70. En este contexto, **el incremento de la pensión**, al ser una consecuencia que nace con posterioridad al otorgamiento de la cuota pensionaria y una vez realizados los debidos aumentos anuales, **no puede considerarse como un derecho adquirido**, sino una expectativa de derecho



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación y la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza".

71. Entonces, la fecha de otorgamiento del beneficio pensionario no puede servir de parámetro para determinar la aplicabilidad de la Unidad de Medida y Actualización, pues como se ha expuesto, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, la referencia al salario mínimo para efectos del tope de pensión debe entenderse referido a la Unidad de Medida y Actualización; **salvo los casos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal cuando con posterioridad al decreto de reformas se haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.**

72. Por tanto, si está demostrado en autos del sumario contencioso que la parte actora aquí **quejosa obtuvo su derecho pensionario el dos de octubre de dos mil diecisiete**, según se indica en la cláusula 3-3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de trece de diciembre de dos mil diecisiete, es que se comprueba que la parte justiciable se ubica en el supuesto de excepción precisado por el Alto Tribunal; de ahí que debe estimarse que contrario a lo sostenido por la sala responsable, **no le resulta aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación**; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, el concepto de salario mínimo debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.

73. En efecto, la parte actora demostró que en la cláusula 3-3 del mencionado acuerdo le **otorgó su pensión la cual se incrementaría en la misma proporción en que se modificaría el salario mínimo en la Ciudad de México**, como se corrobora de su contenido:

"3-3. "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se **incrementará en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.**"

74. En consecuencia, si la parte actora demostró que con posterioridad al decreto de reformas se otorgó su pensión, cuyo incremento se realizará con base en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización, se obtiene que se generó un derecho que entró en el patrimonio de la parte justiciable para que su pensión se incrementara en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.

75. Consecuentemente, **es fundado** lo analizado

5.2. Suplencia de la queja deficiente.

76. Por otra parte, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, 13 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia PC.XII.A. J/1 A (10a.), 14 de rubro: **"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA**

124

17/04/2023



CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", de aplicación por analogía, este tribunal advierte que es procedente conceder el amparo de la Justicia de la Unión con base en lo siguiente:

77. En principio, debe recordarse que en la sentencia reclamada el Pleno Jurisdiccional reclamado resolvió:

- o Finalmente estudió el primer agravio en el que el accionante sostuvo que el pago de fin de año y el incremento de su pensión en un 22% constituyen derechos adquiridos, y lo estimó infundado, con base en que:
 - ✚ El apartado Cuadragésimo quinto del "Acurdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el estímulo de fin de año (vales) ejercicio 2021" establece que todas las reclamaciones que realice el personal que cause baja, entre otras cosas, por pensión, serán improcedentes.
 - ✚ El oficio impugnado está debidamente fundado y motivado, y la petición fue debidamente atendida, de manera completa y coherente, ya que la autoridad indicó que el pago extraordinario solicitado no está regulado en ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja.
 - ✚ Del punto Décimo segundo del citado acuerdo se conoce que el pago de vales de fin de año para el ejercicio dos mil veintiuno sólo se otorgará a los trabajadores en activo, con independencia de que en años anteriores se le haya otorgado esa prestación.
 - ✚ No se transgrede el derecho de petición porque la respuesta impugnada reúne los requisitos necesarios para considerar que la autoridad satisfizo ese derecho, aunado a que no existe obligación de resolver favorablemente a los intereses del gobernado.
 - ✚ Con base en la reforma constitucional de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el monto límite de su pensión debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización, pues el hecho de que en su acuerdo de pensión se haya establecido que ésta se incrementaría con base en el salario mínimo, no significa que ello debe realizarse así para siempre, por lo que no es un derecho adquirido, siendo aplicables los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), cuyos rubros son los siguientes:
 - a) **PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.**
 - b) **PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.**



78. De lo anterior, se observa que la sentencia reclamada carece de debida fundamentación y motivación, pues únicamente se analizó lo relativo al incremento del beneficio pensionario de la parte quejosa en relación con que su cálculo debe hacerse con base en la Unidad de Medida y Actualización; empero, omite precisar cuál es el porcentaje de incremento que corresponde a la pensión de la promovente.

79. Ello es así, porque este tribunal estima que con su escrito de petición de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, es claro que la pretensión de la quejosa era que se desaplique la mencionada unidad de medida, así como obtener el incremento de su pensión a razón de ^{DATO PERSONAL} pues considera que se le otorgó un incremento menor, ya que en dos mil veintiuno el salario mínimo aumentó en esa proporción, no siendo justificado el incremento al que se refiere la demandada al dar respuesta y que motivó la emisión del oficio impugnado, por lo que la responsable está obligada a analizar ese aspecto.

80. Por lo que la ilegalidad de la sentencia reclamada deriva de su falta de fundamentación y motivación, únicamente en cuanto hace a que nada se dijo en relación con el porcentaje de incremento de la pensión, que el amparista sostiene que es de ^{DATO PERSONAL A}

81. En efecto, al emitir el oficio ^{DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX} de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar dijo:

"Ahora bien, en cuanto a la adecuación del pago de pensión que solicita así como el incremento de ^{DATO PERSONAL} a la misma, ^{DATO PERSONAL ART.186 LTAIP} hago de su conocimiento que en la cláusula 3.3 de su Acuerdo de Pensión se establece de manera específica lo referente a las pensiones y de manera especial, el incremento de la misma, que a la letra establece "se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, o bien en los porcentajes que sean determinado por Acuerdo de Órgano de Gobierno"; de tal manera que el incremento de su pensión será conforme a lo autorizado por dicho cuerpo colegiado."

82. Por lo que se insiste que la sentencia reclamada omitió pronunciarse respecto al porcentaje de incremento que el quejoso sostiene le corresponde a su pensión.

83. **NOVENO. Efectos.** En consecuencia, lo procedente es conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable:

- a) Deje sin efecto la sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción, dicte otra en la que:
- b) Analice el oficio impugnado por lo que hace a la solicitud de incremento de ^{DATO PERSONAL} a la pensión de la parte quejosa.
- c) Y determine que la pensión de la parte justiciable debe incrementarse considerado las modificaciones del salario mínimo en la Ciudad de México.

Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en los artículos 74, 183, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se **resuelve**:

ÚNICO. La Justicia de la Unión **ampara y protege a** DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO. En estricto cumplimiento a la Ejecutoria de **veintidós de marzo de dos mil veinticuatro**, dictada en el Juicio de Amparo Directo **D.A. 541/2023**, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, **SE DEJA INSUBSISTENTE** la resolución emitida en el Recurso de Apelación RAJ. 7505/2023, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada por Pleno Jurisdiccional de este Tribunal, y en su lugar se emite la presente conforme a los lineamientos precisados en el Considerando OCTAVO de la ejecutoria que se cumplimenta.

SEGUNDO. COMPETENCIA. El Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 9, 15, fracción VII y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, 116, 117 y 118, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

TERCERO. OPORTUNIDAD LEGAL DE LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación RAJ. 7505/2023, fue interpuesto dentro del plazo legal de diez días que prevé el artículo 118, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que la sentencia apelada le fue notificada a la parte actora el **dieciocho de enero de dos mil veintitrés**, según la constancia de



notificación respectiva (visible a foja ciento cuatro del expediente principal), notificación que surtió efectos el siguiente día hábil, esto es, el diecinueve de enero del mismo año, por lo que el plazo a que alude el citado artículo transcurrió del **veinte de enero al dos de febrero de dos mil veintitrés**; descontando del cómputo respectivo el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del mismo año, por corresponder a sábados y domingos y por ende inhábiles, de conformidad con el artículo 21 del citado ordenamiento legal.

Por tanto, si el recurso de apelación fue presentado el **dos de febrero de dos mil veintitrés**, su interposición es oportuna.

CUARTO. INTERPOSICIÓN POR PARTE LEGÍTIMA. El recurso de apelación **RAJ. 7505/2023** fue interpuesto por parte legítima, en términos del artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que fue promovido por **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** por conducto de su autorizada **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** a quien la Sala de conocimiento le reconoció tal carácter mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós (visible a treinta y uno del expediente de nulidad).

QUINTO. AGRAVIOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. Es innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer en el recurso de apelación, sin embargo, en cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, los argumentos planteados serán examinados debidamente al resolver lo conducente.

Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI,

"AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES A LOS RECURSOS DE APELACIÓN ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los artículos que integran el Capítulo XI del Título Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, denominado 'De las Sentencias', y en particular el diverso 126 se advierte que las sentencias que emitan las Salas no necesitan formulismo alguno, razón por la cual se hace innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por el apelante, sin embargo, tal situación no exime de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad debiendo para ello hacer una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hubieren admitido, señalando los fundamentos legales en que se apoyen.





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

debiendo limitar a los puntos cuestionados y a la solución de la Litis planteada en acato al dispositivo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal."

SEXTO. CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Con la finalidad de conocer los motivos y fundamentos legales con base en los cuales la Sala de origen reconoció la validez del oficio impugnado, se procede a transcribir la parte considerativa del fallo apelado que al caso interesa:

"II.- Previo al estudio del fondo del asunto, procede a resolver sobre las causales de sobreseimiento e improcedencia ya sea que las partes las hagan valer, o aun de oficio, en términos de lo dispuesto por el numeral 92, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.

II.1 La Apoderada Legal de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en representación del C. Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, autoridad demandada en este asunto, en su oficio de contestación a la demanda, hace valer lo previsto en el artículo 92, fracción VI, VII, IX, X y XIII y 93, fracciones II, IV y V de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al indicar como **ÚNICA** causal de improcedencia que respecto al "incremento de mi pensión 22%" no tuvo conocimiento mediante el oficio que impugna, si no que el incremento se ejecutó el 01 de febrero de 2022, por lo que se considera que se ha extinguido el derecho del actor para ejecutarlo, por presentar su demanda fuera del plazo, y respecto al "pago único extraordinario en efectivo (equivalente al concepto de vales de despensa)", le corresponde acreditar la obligación de realizar el pago que pretende, situación que no acontece y que no se acreditan los elementos constitutivos para la acción.

Esta Quinta Sala Ordinaria considera que la causal en estudio es **INFUNDADA**, pues el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, indica:

'El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución.'



En tal contexto, el cómputo debe iniciar cuando el actor tenga conocimiento expreso de los motivos y los fundamentos los cuales se sustenta la contestación a su petición, siendo entonces que, solo con posterioridad a la emisión y notificación del acto a debate, el actor puede hacer valer sus derechos al respecto, y no así, en el momento de percibir el pago del incremento como pretende hacer la autoridad demandada; luego entonces acorde al artículo en cita, el plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de **quince días hábiles**, contados en este caso, a **partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne**, esto es veintiuno de junio del dos mil veintidós, surtiendo efectos el veintidós del mes y año en cita, por lo anterior, la parte actora contaba para interponer su demanda con los días veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de junio del año en curso, así como uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce y trece de julio del dos mil veintidós, con excepción de los días veinticinco y veintiséis de junio, y dos, tres, nueve y diez de julio del mismo año por tratarse de sábados y domingos.

Luego entonces, al haberse interpuso la demanda el **treinta de junio del dos mil veintidós**, es que se considera oportuna la interposición de la misma, y por ello, no procede el sobreseimiento del presente asunto.

Ahora bien, respecto a los argumentos que no se acreditan los elementos constitutivos para la acción, se **DESESTIMA** por involucrar cuestiones del fondo del asunto.

Siendo aplicable la siguiente tesis:

Época: Tercera

Instancia: Sala Superior, TCADF

Tesis: S.S./J. 48

'CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. SI EN SU PLANTEAMIENTO SE HACEN VALER ARGUMENTOS VINCULADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE LA.- Si se plantea una causal de improcedencia del juicio de nulidad, en la que se hagan valer argumentos vinculados con el fondo del asunto, la Sala que conozca del mismo al dictar sentencia deberá desestimarla y si no existe otro motivo de improcedencia, entrar al estudio de los conceptos de nulidad.'

III. La controversia en este asunto, consiste en resolver sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, consistente en: **El** **oficio número** **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** **de fecha** **veinticinco de mayo del 2022, suscrito por el Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, mediante el cual, se da contestación a su escrito de petición ingresado en la Oficialía de Partes el 17 de marzo del 2022, en el que solicita el pago de la Gratificación Extraordinaria "Estímulo de Fin de Año (Vales)",**



ejercicio 2021, así mismo la adecuación del pago de pensión en Salarios Mínimos.

IV.- Previo al análisis de los argumentos vertidos por las partes, se procede a resolver conforme a las constancias que obran agregadas en autos, consistentes en: original del oficio número **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** de fecha veinticinco de mayo del 2022, suscrito por el Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (foja 9 y 10 de autos); copia simple de la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal de fecha 25 de octubre del 2001 (foja 11 a 21 de autos); copia simple y copia certificada del Acuerdo de pensión por Edad y Tiempo de Servicio con número **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** de fecha trece de diciembre del dos mil diecisiete (fojas 22 a 25 y de 44 a 46 de autos); copia simple y copia certificada de los Acuerdos **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** (foja 26 y 47 de autos); Copia simple y copia certificada de los Acuerdos **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** (fojas 27 y 28, así como 77 de autos); copia certificada del Acuerdo número **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** (foja 78 de autos); original del acuse de su escrito de petición ingresado en la Oficialía de Partes de la Dirección General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el día 17 de marzo del 2022 (foja 29 y 30 de autos); copia certificada de los oficios **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** de fechas 09 y 10 de agosto del dos mil veintidós (foja 87 y 88 de autos); mismas que al tratarse de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 91 fracción I y 98 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Ahora bien, la parte actora hace valer en su capítulo denominado **CONCEPTOS DE NULIDAD** como **PRIMERO** y **SEGUNDO**, que el oficio impugnado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado el acto de autoridad, y tampoco encuadra en el supuesto normativo que hace valer la autoridad, para negarle el pago único extraordinario que es el equivalente al estímulo de fin de año (vales) para el ejercicio del 2021, así como pretende hacer mayor jerarquía a los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el estímulo de Fin de Año (Vales) Ejercicio 2021, cuando el sustento de la petición se encuentra contemplado en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 25 de octubre del 2001, ello a fin de garantizar la garantía de igualdad (foja 4 y 5 de autos).

Al respecto, el Apoderado Legal de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en representación del Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, autoridad



demandada en este asunto, señaló en su oficio de contestación que el actor basó su petición del concepto señalado en una prestación que le es concedida solo al personal activo de la Policía Auxiliar y que es el 'ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIOS DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021', por lo que es improcedente la reclamación, ya que solo se otorga el estímulo de fin de año (vales) ejercicio 2021, a los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentran activos en la forma establecida en dichos lineamientos, y que el reclamo de los vales no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado, lo cierto es que el actor causó baja de la Corporación y es Pensionado (fojas 59 y 60 de autos).

Argumentos que por estar relacionados entre sí, se procede analizar de manera conjunta.

Ahora bien, esta Sala estima que los argumentos planteados por el actor, resultan **INFUNDADOS** para decretar la nulidad del acto impugnado, consistente en: **oficio número de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós, respecto al pago de la Gratificación Extraordinaria de fin de año del 2021, pues tomando en consideración que el C. Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, indicó que en relación a la petición de la parte actora presentada el día diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en la que solicitó: '... se me realice el pago de la Gratificación Extraordinaria de fin de año, por la cantidad de DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX Equivalente a lo correspondiente al año 2021...', lo siguiente (foja 13 y 14 de autos):**

Sobre el particular y de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 inciso D, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México,

De acuerdo a su petición, es primordial resaltar que el pago único extraordinario al que hace referencia en su escrito de petición, no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que se advierta de su escrito el presupuesto normativo que obligue a esta Autoridad a actuar y pagar la cantidad de **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**, pues si bien invoca los Acuerdos **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**, estos solo se refieren a una obligación de pago para años anteriores y no por lo que hace al año 2021; por lo cual, la facultad normativa que habita a la autoridad y la obliga a actuar en vía de consecuencia proviene de un acto jurídico previo que lo origine, es decir, que se conozca directamente y sólo queda en espera de su ejecución; sin embargo, en el caso concreto no existe obligación de pago por parte de esta Entidad.

En razón de lo anterior, por lo que hace al concepto de pago de vales de dispensa del año 2021, es importante señalar que existe un **"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021"**, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de noviembre de 2021, modificado el 2 de diciembre del año próximo pasado, mismo que en su Capítulo II numeral DÉCIMO PRIMERO y Capítulo IX numeral CUADROGÉSIMO QUINTO, lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA D.A.541/2023
RECURSO DE APELACIÓN: RAJ. 7505/2023
JUICIO DE NULIDAD: TJ/V-44613/2022

- 39 -



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

**CAPÍTULO I
DEL PERSONAL DE HABILIDADES DE LA POLICÍA GANADERA E INDUSTRIAL, POLICÍA PREVENTIVA Y
POLICÍA AUXILIAR Y DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO Y DE LISTA DE RAYA BASE
SINDICALIZADO NO AGREGADOS AL SUTOCAM.**

**ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021, A LOS TRABAJADORES DE
LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL PERSONAL HABIENTE DE LA POLICÍA Y EL PERSONAL DE
BASE SINDICALIZADO Y LISTA DE RAYA BASE SINDICALIZADO, NO AGREGADO AL SUTOCAM, CUYAS
CONDICIONES DE SERVICIO SON COHERENTES CON CUALQUIER OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO, DE ACUERDO A
LA DECLARACIÓN NÚMERO 2.2.1 DEL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO 1.**

**CAPÍTULO IX
DE LA RECLAMACIÓN**

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja por
renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de nombramiento,
término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total
permanente, al igual que el que se encuentre con licencia sin goce de sueldo o suspendido de sus derechos en las
fechas establecidas para tal fin, en los presentes Lineamientos.

En donde es clara la normatividad al establecer que es improcedente la reclamación de vale de despensa,
ya que **solamente se les otorga el estímulo de fin de año (vales) ejercicio 2021, a los trabajadores de
la Policía Auxiliar que se encuentren en activo** en la forma establecida en dichos lineamientos, y que el
reclamo de los vales no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado, y
en el caso que nos ocupa, usted causó baja el día 1 de octubre de 2017, tal y como se desprende en la
declaración número 2.2.1 de su Acuerdo de Pensión N° 1.

Ahora bien, en el presente asunto, la autoridad demandada en relación a la petición del actor, no concede lo solicitado en virtud de: **1) Que el pago único extraordinario al que se refiere, no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por lo que no existe obligación de pago por parte de dicha Entidad; 2) Que respecto al concepto de pago de vales de despensa del año 2021, existe un 'ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021'; 3) Que es improcedente la reclamación de vales de despensa, ya que solo se otorga a los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentren en activo, y que el reclamo no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado; y, 4) Que el actor causó baja de la Corporación, como se desprende en la declaración 2.2.1 del Acuerdo de Pensión número**

Al efecto, el **ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021**, dispone lo siguiente:

**CAPÍTULO IX
DE LA RECLAMACIÓN**

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja por renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de nombramiento, término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total permanente, al igual que el que se encuentre con licencia sin goce de sueldo o suspendido de sus derechos en las fechas establecidas para tal fin, en los presentes Lineamientos.

Reproducción anterior, de la que se observa que las reclamaciones del **personal que cause baja por pensión**, entre otras, **serán improcedentes**.

Por lo que en el caso concreto, la relación que tenía el actor con dicha Institución Policial se dio por concluida, al emitirse por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio, causando baja de la misma el día **primero de octubre del 2017, con un tiempo de servicio de** (foja 23 de autos).

Luego entonces, al no haber documento con el cual la parte actora hubiese demostrado que posterior a la fecha de su baja hubiese percibido el pago por estímulo de Fin de año (vales de despensa), lo que era su obligación, pues se revirtió la carga de la prueba a la parte actora, debiendo acreditar lo conducente a fin de demostrar la procedencia de sus pretensiones, sin que lo hiciera, máxime que como se advierte del expediente en que se actúa, la parte actora en su escrito de petición indicó que es pensionado por parte de la Caja de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (foja 29 de autos).

Sirve de apoyo, el criterio señalado en la tesis de jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I.

Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2007973 de 1	1
Primera Sala	Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I	Pag. 706	Tesis Aislada(Civil)	

CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, 'no soy la persona que intervino en el acto jurídico') o indefinido (verbigracia, 'nunca he estado en cierto lugar') pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza.

Amparo directo 55/2013. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por lo que hace a la concesión del amparo. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo formuló voto concurrente en el que manifestó apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido en la presente tesis. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que si bien vota por conceder el amparo, no comparte las consideraciones ni los efectos, y formuló voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Por su parte, el actor en el presente asunto, hace valer como concepto de nulidad **TERCERO**, que le causa agravio el oficio impugnado, al transgredir los artículos 14 y 16 Constitucionales,

en virtud de que se le niega el incremento de pensión del 22% en virtud de la cláusula 3.3. de su Acuerdo de Pensión número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de fecha 15 de noviembre del dos mil dieciséis, pues precisa claramente que la pensión se incrementara en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México (foja 6 de autos).

Al respecto, la Apoderada Legal de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de las Ciudad de México, en su oficio de contestación a la demanda, señala que no le asiste la razón al actor, pues el incremento se le concedió a su pensión tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a los Acuerdos números DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX el cual establece en su parte final que: 'los futuros incrementos a la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), se apliquen a las pensiones para su actualización', siendo aplicable el decreto de desindexación al salario mínimo (foja 65 y 66 de autos).

Luego entonces, esta Sala considera **INFUNDADO** lo expuesto por la parte actora, pues la autoridad demandada en relación a su petición indica (foja 9, revés de autos):

Ahora bien, en cuanto a la adecuación del pago de pensión que solicita así como el incremento del DATO PE a la misma, hago de su conocimiento que en la cláusula 3.3 de su Acuerdo de Pensión DATO PERSONAL ART. se establece de manera específica lo referente a las pensiones y de manera especial, el incremento de la misma, que a la letra establece "se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, o bien en los porcentajes que sean determinados por Acuerdo de Órgano de Gobierno.", de tal manera que el incremento de su pensión será conforme a lo autorizado por dicho cuerpo colegiado.

Reproducción anterior, de la cual se observa que el incremento a la pensión se hará anualmente en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, o bien en los porcentajes que sean determinados por Acuerdo de Órgano de Gobierno.

Sin que pase inadvertido para esta Sala lo establecido en el Acuerdo número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX (foja 78 de autos), en el que se señaló que '... ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO TOMA CONOCIMIENTO QUE LAS MENCIONES AL SALARIO MÍNIMO REFERIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EFECTOS DE LA SUMA COTIZABLE PARA PAGOS DE APORTACIONES Y CUOTAS, ASÍ COMO PARA EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENSIONES, SE ENTENDERÁN COMO A UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)'.

Y si bien del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX se desprende que en la Cláusula 3.3, que la pensión '... se incrementara en la misma proporción que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México' (foja 24 de



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

DATO PERSONAL ART.186 LTAIP
autos), también es que conforme al Acuerdo número DATO PERSONAL ART.
la suma colizable para pagos para el monto máximo de
las pensiones se entenderán como **unidades de medida y
actualización**, como en el caso en concreto.

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente Jurisprudencia:

Registro digital: 2025232

Instancia: Segunda Sala

Undécima Época

Materias(s): Administrativa, Laboral

Tesis: 2a./J. 37/2022 (11a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Jurisprudencia

PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si para efecto de calcular el incremento de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que **el aumento anual en la cuantía de las pensiones otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.**

Justificación: Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de quien sea el soporte económico de una familia y en concordancia con la línea argumentativa sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de título y subtítulo: **'PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE**

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.', se concluye que el aumento anual de la cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ello, en atención a que el incremento o actualización de su importe es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional; asimismo, con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del pensionado.

SEGUNDA SALA.

Contradicción de tesis 310/2021. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 25 de mayo de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmin Esquivel Mossa. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Javier Eduardo Estrever Ramos.

Tesis y/o criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 207/2019 (cuaderno auxiliar 325/2020), el cual dio origen a la tesis aislada (IV Región)1o.11 A (10a.), de título y subtítulo: 'UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). ES APLICABLE PARA CALCULAR EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONFORME A SU LEY VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.', publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

septiembre de 2020 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, Tomo II, septiembre de 2020, página 1003, con número de registro digital: 2022113; y,

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 16/2021.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de junio de 2021 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Tomo IV, junio de 2021, página 3604, con número de registro digital: 2023299.

Tesis de jurisprudencia 37/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de julio de dos mil veintidós.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de septiembre de 2022 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de septiembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

Máxime que la pensión que le fue otorgada al actor en el presente asunto es de fecha 13 de diciembre del 2017, es decir, **posterior a la entrada en vigor de la reforma de desindexación del salario mínimo, esto es 28 de enero del 2016.**

Luego entonces, la parte actora al no acreditar los extremos de su pretensión, se procede a reconocer la validez del **oficio número DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCDDMX de fecha veinticinco de mayo del 2022**, al actualizarse lo previsto en el artículo 102, fracción I de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México."

SÉPTIMO. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. Una vez que han sido señalados los fundamentos y motivos en los que se apoyó la Sala de primera instancia al momento de emitir la sentencia recurrida, se procede a estudiar los agravios hechos valer por la parte actora en el recurso de apelación **RAJ. 7505/2023.**

En la segunda parte del **segundo agravio** expuesto por la parte actora, aduce que el derecho humano a su pensión no puede

RAJ. 7505/2023



ser reducido ni suprimido y se rige por el principio de progresividad, que se traduce a no emitir normas que puedan afectar los beneficios otorgados en disposiciones anteriores

En el **tercer agravio** hecho valer por la parte actora, sustancialmente aduce que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala de conocimiento tiene la obligación de analizar el fondo del asunto para no dejar en estado de indefensión a la parte actora, ni vulnerar sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales; lo anterior, para cumplir con el principio de mayor beneficio.

Los agravios reseñados son **fundados y suficientes** para **REVOCAR** la sentencia apelada.

Al efecto se precisa que el acto impugnado consiste en el oficio **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, a través del cual, se dio respuesta a su escrito de petición presentado ante la autoridad el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, informándole que, respecto al pago único extraordinario no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no obstante que se hayan invocado los Acuerdos **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX**

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCD dado que éstos sólo se refieren a una obligación de pago para años anteriores, y no así por lo que hace al pago del año dos mil veintiuno.

Asimismo, se le hizo de su conocimiento que por lo que hace al pago de vales de despensa del año dos mil veintiuno, existe un **"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS**



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021",

normatividad que establece que es improcedente la reclamación del accionante, ya que únicamente los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentren en activo, percibirán el estímulo de fin de año que reclama, por lo que dicho pago no puede hacerse a los pensionados y jubilados.

De igual manera, se le hizo saber que, en cuanto a la adecuación del pago de su pensión, así como del incremento del 22% de la misma, la enjuiciada arribó a la conclusión de que la cláusula 3.3 del propio Acuerdo de pensión establece que su cuota pensionaria se incrementará en la misma proporción que se modifique el salario mínimo mensual en la Ciudad de México, por lo que el incremento que solicita, se hará conforme lo autorice la Institución.

Una vez tramitado el juicio en todas sus etapas procesales, la Sala del conocimiento, reconoció la validez del oficio impugnado, al considerar que el pago de la gratificación extraordinaria del ejercicio dos mil veintiuno, equivalente al concepto de vales de despensa, que recibe el personal activo de la Policía Auxiliar, solicitada por el accionante, por considerar que la parte actora no tiene acceso al mismo, al haber causado baja de la Corporación en el dos mil diecisiete.

Asimismo, consideró que, resulta correcto que el incremento de la pensión del actor se realice con base en los aumentos que ha sufrido la Unidad de Medida y Actualización, ya que, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, todas las referencias al salario mínimo, como parámetro de medida para fines diversos al

laboral, deben considerarse efectuados a la Unidad y Medida de Actualización.

Precisado lo anterior, es importante analizar el **Incremento de la pensión con base en la Unidad de Medida y Actualización.**

Al respecto, es oportuno transcribir la cláusula 3.3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX y el artículo 27 de las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México:

"3.3 "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo en la Ciudad de México.

Artículo 27. La cantidad que perciban los pensionistas en cada caso, será la base para aplicar los porcentajes de incremento cuando se concedan aumentos generales a los sueldos básicos de los elementos activos."

De lo anterior se sabe que la parte actora tiene derecho a que se incremente su pensión en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo de la Ciudad de México, así como que dicho convenio se suscribió en diciembre de dos mil diecisiete; además, la cantidad que perciban los pensionistas será la base para aplicar los porcentajes de incremento para el caso de que los sueldos básicos de los elementos activos perciban algún aumento.

La litis en este punto se centra en determinar si es correcto que el incremento de la pensión de la parte actora se realice con base en la Unidad de Medida y Actualización (como se estableció en la sentencia reclamada), a pesar de que en el acuerdo por el que



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

recibió su beneficio se haya pactado que se llevará a cabo en la medida que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.

Para ello, es importante recordar que existen los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), cuyos rubros son los siguientes:

- a) PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.
- b) PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Así, y sin prejuzgar sobre la aplicabilidad de dicho criterio al aumento anual en su cuantía de las pensiones de los miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no pasa desapercibido para este Pleno Jurisdiccional, que el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados y estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial únicamente respecto de aquellos asegurados a los que con posterioridad al

decreto de reformas se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

Lo anterior, pues se tiene presente la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 200/2020, donde la Segunda Sala del Alto Tribunal examinó el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada a la luz de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo general, publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor a partir del veintiocho de enero de la citada anualidad, en donde sostuvo lo siguiente:

- ✓ Si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa, no a la laboral.
- ✓ El monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo y, por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

- ✓ El monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al Instituto con un salario superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, por lo que esa interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional, razón por la que, de considerar que el tope de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría -en todo caso- en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.
- ✓ No podría considerarse que el hecho de sustituir el valor del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización genere una afectación a los asegurados, pues -por una parte- tanto su salario de cotización, como el tope de las pensiones tienen un límite máximo que es equivalente y -por otra parte- tampoco impide que los asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían recibiendo, si se tiene presente que antes de la implementación de la mencionada reforma, el monto máximo de las pensiones y del salario de

cotización se calculaba con base en un salario mínimo que aumentaba en un porcentaje menor al crecimiento inflacionario.

- ✓ Aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido.

Esas consideraciones dieron lugar a la tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), 11 de rubro y texto siguientes:

PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del

TJ/V-44613/2022
RAJ. 7505/2023
FOLIO 53 DE 53

salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.

Las narradas consideraciones revelan que la superioridad determinó que la reforma constitucional en materia de desindexación es aplicable a los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ese sentido, atendiendo a que la problemática planteada se analizó en relación con el régimen de jubilaciones previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y el que corresponde al artículo Décimo Transitorio de la Ley vigente, es inconcuso que al considerar el ordenamiento legal abrogado, el estudio contempló las pensiones otorgadas con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo.

Y si bien el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados, lo cierto es que estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial **únicamente** respecto de aquellos asegurados a los que **con posterioridad al decreto de reformas** se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Posteriormente, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 310/2021, examinó el tema de si los incrementos en la cuantía de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio o bien es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo, en el contexto del contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y llegó a las siguientes consideraciones:

"53. ... el legislador, en distintos momentos ha reconocido que la cuantía de las pensiones debe aumentarse anualmente y para ello, ha establecido diversas fórmulas para el cálculo de esos incrementos, respecto de los cuáles, debe tomarse en cuenta que esta Segunda Sala(13) ha sostenido que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse y que únicamente quienes se pensionaron con anterioridad al uno de enero de dos mil dos, es decir, del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al salario mínimo. Sin embargo, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, todas las referencias que los cuerpos normativos hagan a tal concepto deben ser entendidas a la UMA, de ahí que, a partir de la mencionada fecha, los incrementos a dichas pensiones deben calcularse con base en la referida unidad de medida.

54. Lo anterior en virtud de que los aumentos de referencia tienen como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los titulares de las pensiones y, por tanto, ajenos a la materia de trabajo; ya que, si bien es cierto son consecuencia de la existencia de una pensión previamente otorgada, no pueden constituir un derecho adquirido en atención a su origen.

55. Es por lo que resulta de especial relevancia establecer la forma en que los operadores jurídicos deben calcular la cuantía de los incrementos anuales en la pensión de los trabajadores.

56. Para tales efectos, el artículo 123 constitucional garantiza a los trabajadores un ingreso mínimo que sea suficiente para que quien sea el soporte económico de una familia pueda satisfacer las necesidades básicas de ésta. Dicho concepto ha sido reconocido, en diversos precedentes por esta Sala Constitucional, como integrante del ámbito laboral.

57. Asimismo, en ese precepto constitucional, pero en su apartado B, fracción XI, inciso a), se salvaguarda el derecho de los trabajadores a obtener una pensión jubilatoria; ello toda vez que se determina que la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que señala, esto es: "Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte".

58. Empero, necesariamente debe puntualizarse, ese derecho a la jubilación es una expectativa de derecho. Esto significa que, para obtener el beneficio, el trabajador está condicionado a prestar sus servicios por el lapso mínimo señalado.

59. Es decir, si no reúne los requisitos legales para acceder a tal prerrogativa, en modo alguno puede afirmarse que adquirió ese derecho, esto es, mientras no se actualicen las hipótesis de efecto condicionado, en el caso, reunir los años de servicio y edad, el trabajador no podrá considerarse u ostentarse como titular del beneficio derivado de la relación laboral, puesto que es hasta ese momento cuando esa prerrogativa se integra a su esfera jurídica y, por tanto, considerarse un derecho adquirido.

60. Lo anterior, se concluye, en atención a que se trata de una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente.

61. Sin embargo, las consecuencias o derivaciones con motivo del otorgamiento de la pensión, entre ellos el aumento o actualización del monto de la pensión es de diversa naturaleza; como se dijo antes, la razón de su existencia es evitar que la pensión pierda su poder adquisitivo por el paso del tiempo como lo reconoció la Organización Mundial del Trabajo en el convenio 102 que en su artículo 65(14) establece la necesidad de la revisión de los montos cuando se produzcan variaciones en el costo de la vida.



Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México



JUSTICIA
 ADMINISTRATIVA
 DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

62. En este sentido, al resolver la contradicción de tesis 200/2020, esta Sala apuntó que los aspectos vinculados con la indebida cuantificación de una pensión pertenecen a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación; asimismo que la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza".

63. En esta línea argumentativa y dado que el aumento anual en el monto de la pensión tiene como nota esencial el mantener el poder adquisitivo de su titular ante el costo de la vida, esto es, se ubica en la esfera del derecho administrativo y no en la materia de trabajo por lo que, se sigue que únicamente constituye una medida de referencia y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, el concepto de salario mínimo establecido en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE (abrogada), en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.

64. Se insiste, lo anterior encuentra sustento en que la finalidad es que el trabajador no pierda su poder adquisitivo, aspecto que no garantiza el salario mínimo ya que, como lo advirtió el Constituyente –durante las sesiones en que se discutió la reforma constitucional en materia de desindexación– el salario mínimo ya no cumple con esa función social de satisfacer al menos las necesidades básicas de la población mexicana.

65. Aunado a que con la aprobación de esa modificación constitucional se pretendió mejorar y recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y con ello, permitir que los ingresos de las y los trabajadores sean acordes con la nueva realidad de una economía dinámica que atienda todas y cada una de las necesidades de la clase trabajadora.

66. Incluso, robustece esta decisión, el hecho de que, en determinado momento, tanto en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE(15) como en el 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, el legislador haya hecho

referencia como parámetro para el cálculo del incremento de la pensión el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que éste es un indicador diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias de México.(16)

67. En suma, dado que el aumento anual de la pensión no configura un derecho previamente adquirido con motivo del otorgamiento del beneficio constitucional al tener como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo, se sigue que constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

68. Consecuentemente, si bien es cierto que el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, establecía que las pensiones debían aumentarse con base en los aumentos al salario mínimo, lo cierto es que dichos incrementos constituyen una mera expectativa de derecho que se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida, de modo que a partir de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, dichas pensiones deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización..."

De estas consideraciones surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.),12 de rubro y texto siguientes:

PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si para efecto de calcular el incremento de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo.



Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el aumento anual en la cuantía de las pensiones otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.

Justificación: Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de quien sea el soporte económico de una familia y en concordancia con la línea argumentativa sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.", se concluye que el aumento anual de la cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ello, en atención a que el incremento o actualización de su importe es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional; asimismo, con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del pensionado.

Como se observa, el Alto Tribunal examinó de nueva cuenta la ejecutoria que dio lugar a la citada tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), y sostuvo que el incremento o actualización del importe de la pensión es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, constituyendo una mera

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, entonces a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con las citadas jurisprudencias - 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.) - *de observancia obligatoria para este tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo* -, se concluye que si bien derivado del otorgamiento de una pensión jubilatoria la previsión legal permite que la misma se incremente anualmente, este aspectos constituyen una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

En este contexto, el incremento de la pensión, al ser una consecuencia que nace con posterioridad al otorgamiento de la cuota pensionaria y una vez realizados los debidos aumentos anuales, no puede considerarse como un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación y la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice,

En efecto, la parte actora demostró que en la cláusula 3-3 del mencionado acuerdo le **otorgó su pensión la cual se incrementaría en la misma proporción en que se modificaría el salario mínimo en la Ciudad de México**, como se corrobora de su contenido:

*"3-3. "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se **incrementará en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.**"*

En consecuencia, si la parte actora demostró que con posterioridad al decreto de reformas se otorgó su pensión, cuyo incremento se realizará con base salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización, se obtiene que se generó un derecho que entró en el patrimonio de la parte justiciable para que su pensión se incremente en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.

Por lo expuesto, y al haber resultado **FUNDADO** para **REVOCAR** una parte del **agravio segundo y tercero** hechos valer por la parte actora en el recurso de apelación **RAJ. 7505/2023**, esta Ad quem estima procedente **REVOCAR** la sentencia apelada y emitir una nueva en sustitución de la dictada el **once de octubre de dos mil veintidós**, pronunciada por la Quinta Sala Ordinaria de este Tribunal, en el juicio número **TJ/V-44613/2022**, quedando sin materia de estudio los restantes agravios.

Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y demás aplicables, se procede a emitir una nueva sentencia.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

OCTAVO. EL PLENO JURISDICCIONAL REASUME LA JURISDICCIÓN. En las relatadas condiciones, se reasume jurisdicción, en sustitución de la Sala de primera instancia, por lo que este Pleno Jurisdiccional procede a emitir una nueva sentencia definitiva.

Es aplicable al efecto, el contenido de la jurisprudencia XI.2o.J/29, con registro 177094, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que aparece publicada en el Apéndice de dos mil cinco, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se reproduce a continuación:

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios."

En ese tenor, se considera pertinente destacar que, dentro de los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del capítulo intitulado **RESULTANDO** de la presente resolución, se realizó la relatoría de los antecedentes del presente juicio, por lo que los mismos se tienen por insertos en el presente apartado, en aras de economía procesal y a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

NOVENO. FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. La controversia en el presente juicio de nulidad, consiste en determinar sobre la legalidad del **oficio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de veinticinco de mayo de dos mil veintidós**, al tenor de las manifestaciones hechas valer por las partes y valorando las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad, en términos de lo establecido en el artículo 98, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

DÉCIMO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo estudio del fondo del asunto, esta Sala procede analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento, ya sea que las haga valer la parte demandada o aún de oficio en términos de lo dispuesto por el numeral 98 así como el diverso 70, en relación al 92, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.

La Apoderada Legal de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en representación del C. Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, autoridad demandada en este asunto, en su oficio de contestación a la demanda, hace valer lo previsto en el artículo 92, fracción VI, VII, IX, X y XIII y 93, fracciones II, IV y V de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al indicar como **ÚNICA** causal de improcedencia que respecto al "incremento de mi pensión" **DATO PERSONAL A** no tuvo conocimiento mediante el oficio que impugna, si no que el incremento se ejecutó el uno de febrero de dos mil veintidós, por lo que se considera que se ha extinguido el derecho del actor para ejecutario, por presentar su demanda fuera del plazo, y respecto al "pago único extraordinario en efectivo (equivalente al concepto de vales de



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

despensa)", le corresponde acreditar la obligación de realizar el pago que pretende, situación que no acontece y que no se acreditan los elementos constitutivos para la acción.

Este Pleno considera que la causal en estudio es **INFUNDADA**, pues el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, indica:

"56. El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rige, o del siguiente en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor del mismo, o de su ejecución."

En tal contexto, el cómputo debe iniciar cuando el actor tenga conocimiento expreso de los motivos y los fundamentos los cuales se sustenta la contestación a su petición, siendo entonces que, solo con posterioridad a la emisión y notificación del acto a debate, el actor puede hacer valer sus derechos al respecto, y no así, en el momento de percibir el pago del incremento como pretende hacer la autoridad demandada; luego entonces acorde al artículo en cita, el plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de **quince días hábiles**, contados en este caso, **a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del acto que se impugne**, esto es veintiuno de junio del dos mil veintidós, surtiendo efectos el veintidós del mes y año en cita, por lo anterior, la parte actora contaba para interponer su demanda con los días veintitrés, veinticuatro, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de junio del año en curso, así como uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, once, doce y trece de julio del dos mil veintidós, con excepción de los días veinticinco y veintiséis de junio, y dos, tres, nueve y diez de julio del mismo año por tratarse de sábados y domingos.

TJ-V-44613/2022
RAJ. 7505/2023
TJ-V-44613/2022

Luego entonces, al haberse interpuso la demanda el **treinta de junio del dos mil veintidós**, es que se considera oportuna la interposición de la misma, y por ello, no procede el sobreseimiento del presente asunto.

Ahora bien, respecto a los argumentos que no se acreditan los elementos constitutivos para la acción, se **DESESTIMA** por involucrar cuestiones del fondo del asunto.

Siendo aplicable la siguiente tesis:

Época: Tercera

Instancia: Sala Superior, TCADF

Tesis: S.S./J. 48

"CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. SI EN SU PLANTEAMIENTO SE HACEN VALER ARGUMENTOS VINCULADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE LA.- Si se plantea una causal de improcedencia del juicio de nulidad, en la que se hagan valer argumentos vinculados con el fondo del asunto, la Sala que conozca del mismo al dictar sentencia deberá desestimarla y si no existe otro motivo de improcedencia, entrar al estudio de los conceptos de nulidad."

Atento a que la autoridad demandada no invocó la existencia de alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento y esta Juzgadora no advierte la existencia de diversa que deba ser analizada de oficio, se procede al estudio de fondo de la cuestión planteada en este juicio.

DÉCIMO PRIMERO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. Una vez determinada la litis en el presente juicio, del análisis de los argumentos manifestados por cada una de las partes, valorando las pruebas debidamente exhibidas en autos del expediente de nulidad y supliendo las deficiencias de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, 97, 98 y 101 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México este



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Pleno Jurisdiccional se avoca al análisis de la resolución materia de la controversia planteada, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas.

Este Pleno Jurisdiccional se adentra al estudio de los conceptos de nulidad identificados como "PRIMERO" y "SEGUNDO" del apartado intitulado "CONCEPTOS DE NULIDAD" del escrito inicial de demanda, en los que el actor manifiesta que es ilegal el acto controvertido y debe declararse su nulidad, en tanto que:

- El acto impugnado viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues considera que no se fundó y motivó debidamente al negarse el pago único extraordinario que es equivalente al estímulo de fin de año (vales de fin de año del ejercicio dos mil veintiuno)
- Que se pretende dar mayor jerarquía a los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el Estimulo de Fin de Año (Vales) Ejercicio 2021, cuando el sustento de su petición se encuentra sustentado en el Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil uno.

Los argumentos previamente sintetizados son **infundados**, de conformidad con las consideraciones jurídicas que a continuación se precisan:

En primer término, debe precisarse que el acto impugnado en el presente asunto lo constituye el **oficio número**
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX **de fecha veinticinco de mayo del**
dos mil veintidós, emitido en respuesta a la solicitud de pago que



planteó el actor respecto a la Gratificación Extraordinaria de fin de año del dos mil veintiuno.

Al emitir la respuesta contenida en el oficio controvertido, el C. Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Provisión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, indicó que en relación a la petición de la parte actora presentada el día diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en la que solicitó: "... se me realice el pago de la Gratificación Extraordinaria de fin de año, por la cantidad de

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Equivalente a lo correspondiente al año 2021...", lo siguiente (foja 13 y 14 de autos):

En atención a su escrito de fecha 17 de marzo de 2022 ingresado en el Control de Gestión de esta Entidad, el 17 de marzo de 2022, en el cual solicita "...se me realice el pago de la Gratificación Extraordinaria de fin de año, por la cantidad de

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

Equivalente a lo que recibe en vales el personal activo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, correspondiente al año 2021..." y "...LA ADECUACIÓN DEL PAGO DE MI PENSIÓN, ya que el aumento del

DATO PER

al Salario Mínimo General, que Autorizo el Gobierno Federal, únicamente me otorgaron el 7.36% ya que me aplicaron la Unidad de Medida y Actualización (UMA)..." (SIC).

Sobre el particular y de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 inciso D, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Caja de Provisión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

De acuerdo a su petición, es primordial resaltar que el pago único extraordinario al que hace referencia en su escrito de petición, no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Provisión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, sin que se advierta de su escrito el presupuesto normativo que obligue a esta Autoridad a acatar y pagar la cantidad de : **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** que afirma, pues si bien invoca los Acuerdos "Acuerdo

En razón de lo anterior, por lo que hace al concepto de pago de vales de despensa del año 2021, es importante señalar que existe un "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de noviembre de 2021, modificado el 2 de diciembre del año próximo pasado, mismo que en su Capítulo II numeral DÉCIMO PRIMERO y Capítulo IX numeral CUADRAGÉSIMO QUINTO, lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA D.A.541/2023
RECURSO DE APELACIÓN: RAJ. 7505/2023
JUICIO DE NULIDAD: TJ/V-44613/2022
- 69 -



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

"CAPÍTULO II

DEL PERSONAL DE HABERES, DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, POLICÍA PREVENTIVA Y
POLICÍA AUXILIAR, Y DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO Y DE LISTA DE RAYA BASE
SINDICALIZADO NO AGREMIADOS AL SUTGCDMX.

"DÉCIMO PRIMERO. El GCDMX otorgará el estímulo de fin de año VALES ejercicio 2021, a través de los
Jefes de los Organos de la Administración Pública, al personal de Haberes de la Policía y al personal de
Base Sindicalizado y Lista de Raya Base Sindicalizado. No agremiado al SUTGCDMX, cuyas
remuneraciones sean cubiertas con cargo al Capítulo 1000 "Servicios Personales" de acuerdo al
Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México."

"CAPÍTULO IX
DE LA RECLAMACIÓN

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja por
renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de subrogamiento,
término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total
permanente, al igual que el que se encuentre con licencia en goce de sueldo o suspendido de sus
derechos en las fechas establecidas para tal fin, en los presentes"

En donde es clara la normatividad al establecer que es improcedente la reclamación de vale de despensa,
ya que solamente se les otorga el estímulo de fin de año (Vales) ejercicio 2021, a los trabajadores de
la Policía Auxiliar que se encuentren en activo en la forma establecida en dichos lineamientos, y que el
reclamo de los vales no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado, y
en el caso que nos ocupa, usted causó baja el día 1 de octubre de 2017, tal y como se desprende en la
declaración número 2.2.1 de su Acuerdo de Pensión

DATA PERSONAL ART.16

De la anterior reproducción digital se advierte que, en el presente asunto, la autoridad demandada en relación a la petición del actor, no concede lo solicitado en virtud de: **1)** Que el pago único extraordinario al que se refiere, no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por lo que no existe obligación de pago por parte de dicha Entidad; **2)** Que respecto al concepto de pago de vales de despensa del año 2021, existe un "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO (VALES) EJERCICIO 2021"; **3)** Que es improcedente la reclamación de vales de despensa, ya que solo se otorga a los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentren en activo, y que el reclamo no lo podrá efectuar el personal que se encuentre como pensionado o jubilado; y, **4)** Que el actor causó baja de la Corporación, como se desprende en la declaración 2.2.1 del Acuerdo de Pensión número

DATA PERSONAL ART.166 LTAIPR



Del análisis realizado al "**Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el Estímulo de Fin de Año (Vales) Ejercicio 2021**", ordenamiento jurídico en el cual la enjuiciada apoyó su determinación, en su apartado **CUADRAGÉSIMO QUINTO**, se infiere que todas las reclamaciones que realice el personal que cause baja por renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de nombramiento, término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total permanente, serán improcedentes.

En ese sentido, la respuesta impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, conforme a la petición en cuestión, pues la autoridad indicó que en cuanto al "*pago único extraordinario*" solicitado, no se encuentra regulado por ninguna normatividad aplicable a los pensionados de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; aunado a que el sustento jurídico que señaló el accionante como base de su petición, se refería a ejercicios anteriores al dos mil veintiuno, por tanto, no existe obligación de pago por parte de la enjuiciada.

Lo anterior, pues mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido, sino que, sólo constituye una expectativa de derecho, y por ello, si la norma cambia antes de llegar al supuesto concreto, una vez actualizada ésta, debe regir la nueva norma.

En ese sentido, si bien el actor señaló en su demanda que en años anteriores se le había otorgado el pago de dicha prestación, lo cierto es que, para el año dos mil veintiuno esto ya no le es aplicable, derivado de que existe el ordenamiento jurídico que así lo prevé, esto es, el "**Acuerdo mediante el cual se dan a conocer**



los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el **Estímulo de Fin de Año (Vales) Ejercicio 2021**", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, modificado el dos de diciembre de ese mismo año, que en su **Capítulo II**, numeral **DÉCIMO PRIMERO** y **Capítulo IX**, numeral **CUADRAGÉSIMO QUINTO**, establece lo siguiente:

"CAPÍTULO II

DEL PERSONAL DE LOS HABERES DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, POLICÍA AUXILIAR, Y DEL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO Y DE LISTA DE RAYA BASE SINDICALIZADO NO AGREMIADOS AL SUTGCDMX.

DÉCIMO PRIMERO. El GCDMX otorgará el estímulo de fin de año AVALES ejercicio 2021, a través de los titulares de los órganos de la Administración Pública, al personal de Haberes de la Policía y el personal de Base Sindicalizado y Lista de Raya de Base Sindicalizado. No agremiado al SUTGCDMX, cuyas remuneraciones sean cubiertas con cargo al Capítulo 1000 'Servicios Personales' de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México."
(Énfasis añadido)

**"CAPÍTULO IX
DE LA RECLAMACIÓN**

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja por renuncia, jubilación, pensión, abandono de empleo, resolución administrativa, término de nombramiento, término de interinato o beca, defunción, invalidez, incapacidad total y permanente y/o invalidez total permanente, al igual que el que se encuentre con licencia sin goce de sueldo o suspendido de sus derechos en las fechas establecidas para tal fin, en los presentes Lineamientos."
(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende, como lo estableció la demandada en el acto impugnado, que solamente se otorgará el estímulo de fin de año (Vales) Ejercicio 2021, a los trabajadores de la Policía Auxiliar que se encuentren en activo, y que serán improcedentes las reclamaciones del personal que cause baja, entre otros supuestos, por pensión; hipótesis jurídica en la que se

ubica el actor, tal como se dijo con antelación, puesto que en su escrito de petición presentado ante la demandada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, manifestó ser pensionado de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, es claro que la petición del promovente, concerniente al pago de la "*Gratificación Extraordinaria de fin de año*", correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, fue debidamente atendida, de manera completa y coherente, pronunciándose conforme a derecho y resolviendo lo planteado.

En ese contexto, es claro que no existe una violación al derecho de petición de la parte actora, puesto que la respuesta reúne los requisitos que jurisprudencialmente se han considerado necesarios para que se estime que la autoridad satisfizo esa prerrogativa; sin que la respuesta deba necesariamente ser favorable a los intereses del particular, esto es, no existe obligación de resolver en determinado sentido, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el peticionario, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso.

En ese orden de ideas, como lo determinó la Sala del conocimiento, contrario a lo que expone el demandante, en el presente caso **no es procedente otorgarle el pago que solicitó**, debido a que tal como se precisó, las reclamaciones que realice el personal que haya causado baja por pensión, serán **improcedentes**, hipótesis jurídica que se actualiza en el presente asunto, en virtud de que el demandante cuenta con dicho carácter, ya que percibe una pensión por edad y tiempo de servicio.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Lo anterior, debido a que respecto a dicha prestación, el *"Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el Estimulo de Fin de Año (Vales) Ejercicio 2021"*, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, modificado el dos de diciembre de ese mismo año, establece un trato específico para los servidores públicos que hayan causado baja por pensión; por tanto, al prever para ese tipo de personal una previsión específica, debe de aplicarse la misma, de ahí lo infundado de los conceptos de nulidad en estudio.

De ahí que los argumentos analizados sean **INFUNDADOS**.

Por otro lado, **y en estricta observancia a la ejecutoria que se cumplimenta**, este Pleno jurisdiccional procede a analizar el concepto de nulidad identificado como **"TERCERO"** del escrito inicial de demanda, en el que la parte actora refiere que el acto impugnado es ilegal y debe declararse su nulidad en virtud de que:

- El acto controvertido es ilegal en virtud de que en el mismo se niega el incremento solicitado, a pesar de que en la cláusula 3.3 del Acuerdo de Pensión número DATA PERSONAL ART.186 LTAIPRCDDMX de trece de diciembre de dos mil diecisiete precisa de manera clara que esa pensión que le fue otorgada se incrementara en la misma porción en que se modifique anualmente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México.

El concepto de nulidad previamente sintetizado es **fundado** y suficiente para declarar la nulidad del acto controvertido, de conformidad con las consideraciones jurídicas siguientes:

Al efecto, es importante analizar el **Incremento de la pensión con base en la Unidad de Medida y Actualización.**

En principio, es necesario transcribir la cláusula 3.3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio emitido a nombre del actor, y el artículo 27 de las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México:

DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX

"3.3 "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se incrementará en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo en la Ciudad de México.

Artículo 27. La cantidad que perciban los pensionistas en cada caso, será la base para aplicar los porcentajes de incremento cuando se concedan aumentos generales a los sueldos básicos de los elementos activos."

SECRETARÍA DE
DEFENSA
SECRETARÍA DE
DEFENSA
SECRETARÍA DE
DEFENSA

De lo anterior se sabe que la parte actora tiene derecho a que se incremente su pensión en la misma proporción en que se modifique anualmente el salario mínimo de la Ciudad de México, así como que dicho convenio se suscribió en diciembre de dos mil diecisiete; además, la cantidad que perciban los pensionistas será la base para aplicar los porcentajes de incremento para el caso de que los sueldos básicos de los elementos activos perciban algún aumento.

La litis en este punto se centra en determinar si es correcto que el incremento de la pensión de la parte actora se realice con base en la Unidad de Medida y Actualización (como se estableció en la sentencia reclamada), a pesar de que en el acuerdo por el que recibió su beneficio se haya pactado que se llevará a cabo en la medida que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

Para ello, es importante recordar que existen los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.), cuyos rubros son los siguientes:

b) PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

b) PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Así, y sin prejuzgar sobre la aplicabilidad de dicho criterio al aumento anual en su cuantía de las pensiones de los miembros de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no pasa desapercibido para este Pleno Jurisdiccional, que el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados y estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial únicamente respecto de aquellos asegurados a los que con posterioridad al decreto de reformas se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en salario mínimo (y no en unidad de medida y

actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

Lo anterior, pues se tiene presente la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 200/2020, donde la Segunda Sala del Alto Tribunal examinó el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada a la luz de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo general, publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor a partir del veintiocho de enero de la citada anualidad, en donde sostuvo lo siguiente:

- ✓ Si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa, no a la laboral.
- ✓ El monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo y, por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

- ✓ El monto máximo de las pensiones únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización más altos, es decir, aquellos que cotizan al Instituto con un salario superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, por lo que esa interpretación es acorde con el objetivo esencial de la reforma constitucional, razón por la que, de considerar que el tope de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría -en todo caso- en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.
- ✓ No podría considerarse que el hecho de sustituir el valor del salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización genere una afectación a los asegurados, pues -por una parte- tanto su salario de cotización, como el tope de las pensiones tienen un límite máximo que es equivalente y -por otra parte- tampoco impide que los asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían recibiendo, si se tiene presente que antes de la implementación de la mencionada reforma, el monto máximo de las pensiones y del salario de cotización se calculaba con base en un salario mínimo que

aumentaba en un porcentaje menor al crecimiento inflacionario.

- ✓ Aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido.

Esas consideraciones dieron lugar a la tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), 11 de rubro y texto siguientes:

"PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o bien, si dicho monto debe ser cuantificado con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.

Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a que tiene derecho todo trabajador con motivo de las



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

labores desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del salario de cotización también debe determinarse con base en el salario mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación.*

Las narradas consideraciones revelan que la superioridad determinó que la reforma constitucional en materia de desindexación es aplicable a los conceptos de salario mínimo establecidos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ese sentido, atendiendo a que la problemática planteada se analizó en relación con el régimen de jubilaciones previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y el que corresponde al artículo Décimo Transitorio de la Ley vigente, es inconcuso que al considerar el ordenamiento legal abrogado, el estudio contempló las pensiones otorgadas con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo.

Y si bien el Máximo Tribunal consideró un ámbito temporal de aplicación del decreto de reformas, con el fin de preservar derechos adquiridos de los pensionados, lo cierto es que estableció la inaplicación del criterio jurisprudencial **únicamente** respecto de aquellos asegurados a los que **con posterioridad al decreto de reformas** se les haya otorgado una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
CIJ-0001
SECRETARÍA DE
DEACU





Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México



Posteriormente, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 310/2021, examinó el tema de si los incrementos en la cuantía de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio o bien es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en materia de desindexación del salario mínimo, en el contexto del contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y llegó a las siguientes consideraciones:

"53. ... el legislador, en distintos momentos ha reconocido que la cuantía de las pensiones debe aumentarse anualmente y para ello, ha establecido diversas fórmulas para el cálculo de esos incrementos, respecto de los cuáles, debe tomarse en cuenta que esta Segunda Sala(13) ha sostenido que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse y que únicamente quienes se pensionaron con anterioridad al uno de enero de dos mil dos, es decir, del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al salario mínimo. Sin embargo, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, todas las referencias que los cuerpos normativos hagan a tal concepto deben ser entendidas a la UMA, de ahí que, a partir de la mencionada fecha, los incrementos a dichas pensiones deben calcularse con base en la referida unidad de medida.

54. Lo anterior en virtud de que los aumentos de referencia tienen como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los titulares de las pensiones y, por tanto, ajenos a la materia de trabajo; ya que, si bien es cierto son consecuencia de la existencia de una pensión previamente otorgada, no pueden constituir un derecho adquirido en atención a su origen.

55. Es por lo que resulta de especial relevancia establecer la forma en que los operadores jurídicos deben calcular la

cuantía de los incrementos anuales en la pensión de los trabajadores.

56. Para tales efectos, el artículo 123 constitucional garantiza a los trabajadores un ingreso mínimo que sea suficiente para que quien sea el soporte económico de una familia pueda satisfacer las necesidades básicas de ésta. Dicho concepto ha sido reconocido, en diversos precedentes por esta Sala Constitucional, como integrante del ámbito laboral.

57. Asimismo, en ese precepto constitucional, pero en su apartado B, fracción XI, inciso a), se salvaguarda el derecho de los trabajadores a obtener una pensión jubilatoria; ello toda vez que se determina que la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que señala, esto es: "Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte".

58. Empero, necesariamente debe puntualizarse, ese derecho a la jubilación es una expectativa de derecho. Esto significa que, para obtener el beneficio, el trabajador está condicionado a prestar sus servicios por el lapso mínimo señalado.

59. Es decir, si no reúne los requisitos legales para acceder a tal prerrogativa, en modo alguno puede afirmarse que adquirió ese derecho, esto es, mientras no se actualicen las hipótesis de efecto condicionado, en el caso, reunir los años de servicio y edad, el trabajador no podrá considerarse u ostentarse como titular del beneficio derivado de la relación laboral, puesto que es hasta ese momento cuando esa prerrogativa se integra a su esfera jurídica y, por tanto, considerarse un derecho adquirido.

60. Lo anterior, se concluye, en atención a que se trata de una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente.

61. Sin embargo, las consecuencias o derivaciones con motivo del otorgamiento de la pensión, entre ellos el aumento o actualización del monto de la pensión es de diversa naturaleza; como se dijo antes, la razón de su existencia es evitar que la pensión pierda su poder adquisitivo por el paso del tiempo como lo reconoció la Organización Mundial del Trabajo en el convenio 102 que en su artículo 65(14) establece la necesidad de la revisión de los montos cuando se produzcan variaciones en el costo de la vida.





Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

62. En este sentido, al resolver la contradicción de tesis 200/2020, esta Sala apuntó que los aspectos vinculados con la indebida cuantificación de una pensión pertenecen a la materia administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni está en juego su revocación; asimismo que la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza".

63. En esta línea argumentativa y dado que el aumento anual en el monto de la pensión tiene como nota esencial el mantener el poder adquisitivo de su titular ante el costo de la vida, esto es, se ubica en la esfera del derecho administrativo y no en la materia de trabajo por lo que, se sigue que únicamente constituye una medida de referencia y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, el concepto de salario mínimo establecido en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE (abrogada), en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.

64. Se insiste, lo anterior encuentra sustento en que la finalidad es que el trabajador no pierda su poder adquisitivo, aspecto que no garantiza el salario mínimo ya que, como lo advirtió el Constituyente —durante las sesiones en que se discutió la reforma constitucional en materia de desindexación— el salario mínimo ya no cumple con esa función social de satisfacer al menos las necesidades básicas de la población mexicana.

65. Aunado a que con la aprobación de esa modificación constitucional se pretendió mejorar y recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y con ello, permitir que los ingresos de las y los trabajadores sean acordes con la nueva realidad de una economía dinámica que atienda todas y cada una de las necesidades de la clase trabajadora.

66. Incluso, robustece esta decisión, el hecho de que, en determinado momento, tanto en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE(15) como en el 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, el legislador haya hecho referencia como parámetro para el cálculo del incremento

de la pensión el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que éste es un indicador diseñado específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias de México.(16)

67. En suma, dado que el aumento anual de la pensión no configura un derecho previamente adquirido con motivo del otorgamiento del beneficio constitucional al tener como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo, se sigue que constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

68. Consecuentemente, si bien es cierto que el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada, en su texto vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, establecía que las pensiones debían aumentarse con base en los aumentos al salario mínimo, lo cierto es que dichos incrementos constituyen una mera expectativa de derecho que se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida, de modo que a partir de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, dichas pensiones deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización..."

De estas consideraciones surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.),12 de rubro y texto siguientes:

"PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si para efecto de calcular el incremento de la pensión por jubilación debe atenderse a la fecha en que se otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el aumento anual en la cuantía de las



Tribunal de Justicia
 Administrativa
 de la
 Ciudad de México

pensiones otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el salario mínimo.

Justificación: Con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar cumplimiento al mandato constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de quien sea el soporte económico de una familia y en concordancia con la línea argumentativa sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, de la que emanó la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO.", se concluye que el aumento anual de la cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ello, en atención a que el incremento o actualización de su importe es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo con el fin de que cumpla con su función constitucional; asimismo, con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del pensionado."

Como se observa, el Alto Tribunal examinó de nueva cuenta la ejecutoria que dio lugar a la citada tesis jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (11a.), y sostuvo que el incremento o actualización del importe de la pensión es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, constituyendo una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se

actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida, por lo cual, el incremento a que alude el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, en su texto vigente en el periodo del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, al hacer referencia a una medida o referencia ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, entonces a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, debe cuantificarse a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

De acuerdo con las citadas jurisprudencias - 2a./J. 30/2021 (10a.) y 2a./J. 37/2022 (11a.) - *de observancia obligatoria para este tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo* -, se concluye que si bien derivado del otorgamiento de una pensión jubilatoria la previsión legal permite que la misma se incremente anualmente, este aspectos constituyen una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida.

En este contexto, el incremento de la pensión, al ser una consecuencia que nace con posterioridad al otorgamiento de la cuota pensionaria y una vez realizados los debidos aumentos anuales, no puede considerarse como un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho y, por tanto, le es aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación y la determinación de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el mandato constitucional prohíbe emplearlo como "índice,



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México



unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza".

Entonces, la fecha de otorgamiento del beneficio pensionario no puede servir de parámetro para determinar la aplicabilidad de la Unidad de Medida y Actualización, pues como se ha expuesto, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, la referencia al salario mínimo para efectos el tope de pensión debe entenderse referido a la Unidad de Medida y Actualización; salvo los casos de excepción establecidos por el Máximo Tribunal cuando con posterioridad al decreto de reformas se haya otorgado una pensión jubilaria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo (y no en unidad de medida y actualización), ya sea porque así lo determinó el propio Instituto, o bien, como consecuencia de una sentencia ejecutoria.

Por tanto, si está demostrado en autos del juicio contencioso que al rubro se precisa, que la parte actora **obtuvo su derecho pensionario el dos de octubre de dos mil diecisiete**, según se indica en la cláusula 3-3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX de trece de diciembre de dos mil diecisiete, es que se comprueba que la parte justiciable se ubica en el supuesto de excepción precisado por el Alto Tribunal; de ahí que debe estimarse que contrario a lo sostenido por la sala responsable, no le resulta aplicable la reforma constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma constitucional, el concepto de salario mínimo debe entenderse referido a la nueva unidad de cuenta.



En efecto, la parte actora demostró que en la cláusula 3-3 del mencionado acuerdo le **otorgó su pensión la cual se incrementaría en la misma proporción en que se modificaría el salario mínimo en la Ciudad de México**, como se corrobora de su contenido:

*"3-3. "La Caja" otorgará la pensión correspondiente a partir del 02 de octubre de 2017, la cual se **incrementará en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.**"*

En consecuencia, si la parte actora demostró que con posterioridad al decreto de reformas se otorgó su pensión, cuyo incremento ser realizará con base salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización, se obtiene que se generó un derecho que entró en el patrimonio de la parte justiciable para que su pensión se incremente en la misma proporción en que se modifique el salario mínimo en la Ciudad de México.

Por ello y como se adelantó, es **FUNDADO** el concepto de nulidad analizado y suficiente para declarar la nulidad del acto controvertido, consistente en el oficio **DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX** de veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

DÉCIMO SEGUNDO. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS FORMULADOS EN EL CONCEPTO DE NULIDAD. En consecuencia, dado que los argumentos planteados por el actor en su tercer concepto de nulidad en estudio resultaron fundados, al haberse emitido el acto impugnado en contravención a lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 91, 98, 100, fracciones II y IV, así como 102, fracción III, ambos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se



Tribunal de Justicia
Administrativa
de la
Ciudad de México

DECLARA LA NULIDAD del oficio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX
de veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

Por lo anterior, y a efecto de restituir los derechos que indebidamente fueron afectados con la emisión del acto declarado nulo, queda obligada la autoridad demandada a:

A) Dejar sin efecto legal alguno el oficio
DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX **de veinticinco de mayo de dos mil veintidós** y proceda a emitir uno nuevo debidamente fundado y motivado, en el cual se dé respuesta a la solicitud de la parte actora consistente en el incremento de pensión mensual, en términos del salario mínimo vigente en la Ciudad de México a que alude la cláusula 3-3 del Acuerdo de Pensión por Edad y Tiempo de Servicio DATO PERSONAL ART.186 LTAIPRCCDMX
de trece de diciembre de dos mil diecisiete, es decir, se deberá ordenar que se incremente la pensión de cual goza la accionante, tal como lo establece el acuerdo de pensión citado, **"es decir, en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo mensual en la Ciudad de México", DESDE LA CONCESIÓN DE LA PENSIÓN, INCLUYENDO EL INCREMENTO DE DATO PERSONAL A QUE SOLICITA LA PARTE ACTORA, MISMO QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2022 Y EN LO SUBSECUENTE.**

B) En caso de resultar diferencias de la confrontación que se haga de la nueva pensión con la originalmente otorgada, proveer que se le paguen las diferencias con efecto retroactivo, desde el momento en que debió aplicar los incrementos hasta en tanto se realice el pago al actor y sea cumplimentada en sus términos por la demandada, en virtud de que no ha prescrito el derecho del actor para reclamar

154
2023-05-15
154

el pago de las diferencias de la pensión que le fue otorgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de las Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (hoy Ciudad de México);

C) La autoridad queda constreñida a que la pensión que se le pague a la actora en los periodos subsecuentes, debe hacerse conforme a lo determinado en el presente fallo.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 1º, 15 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como de 116, 117, y 118, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se

RESUELVE:

PRIMERO. En cumplimiento de ejecutoria de **veintidós de marzo de dos mil veinticuatro**, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los autos del juicio de amparo directo **D.A. 541/2023**, **SE DEJA INSUBSISTENTE** la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitida por este Pleno Jurisdiccional el recurso de apelación **RAJ. 7505/2023**, derivados del juicio de nulidad **TJV-44613/2022**.

SEGUNDO. Son **FUNDADOS** los agravios segundo y tercero hechos valer en el recurso de apelación **RAJ. 7505/2023** de conformidad con los motivos y fundamentos expresados en el Considerando séptimo de este fallo.



TERCERO. Se **REVOCA** la sentencia recurrida de once de octubre de dos mil veintidós dictada en los autos del juicio contencioso administrativo **TJV-44613/2022**, por los motivos y fundamentos precisados en la última parte del considerando **SÉPTIMO** de la presente resolución.

CUARTO. No se **SOBRESEE** en el juicio, de conformidad con las consideraciones expuesta en el considerando décimo de la presente sentencia.

QUINTO. Se **DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA** de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando Décimo Primero y para los efectos precisados en la parte final del Considerando Décimo Segundo.

SEXTO. Se les hace saber a las partes que en contra de la presente resolución podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo.

SÉPTIMO. A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda las partes pueden acudir ante la Magistrada Ponente, para que les explique el contenido y los alcances de la presente resolución.

OCTAVO. Por oficio, remítase copia autorizada de la presente resolución al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como constancia del cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo **D.A. 541/2023**.

NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes y por oficio acompañado de copia autorizada de la presente sentencia, devuélvase a la Sala de Origen el expediente del juicio de nulidad **TJV-44613/2022** y en su oportunidad, archívense los expedientes de los presentes recursos de apelación, como asuntos total y definitivamente concluidos.

SIN TEXTO



Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México

PA-004084-2024

#235 - AMPARO DIRECTO D.A.: 541/2023 - RAJ.7505/2023 - APROBADO		
Convocatoria: G-17/2024 ORDINARIA	Fecha de pleno: 08 de mayo del 2024	Ponencia: SS Ponencia 5
No. juicio: TJV-44613/2022	Magistrado: Doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres	Páginas: 93

ASÍ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LO RESOLVIÓ EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO INTEGRADO POR LOS C.C. MAGISTRADOS DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ESTE TRIBUNAL, LICENCIADO JOSÉ RAÚL ARMIDA REYES, LICENCIADA LAURA EMILIA ACEVES GUTIÉRREZ, DOCTOR JESÚS ANLÉN ALEMÁN, MAESTRO JOSÉ ARTURO DE LA ROSA PEÑA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MAESTRA REBECA GÓMEZ MARTÍNEZ, DOCTORA MARIANA MORANCHEL POCATERRA, DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES Y EL LICENCIADO ANDRÉS ÁNGEL AGUILERA MARTÍNEZ.

FUE PONENTE EN ESTE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA LA C. MAGISTRADA DOCTORA XÓCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES.

EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO NÚMERO D.A.: 541/2023 DERIVADO DEL RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.7505/2023 CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD: TJV-44613/2022, PRONUNCIADA POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 9, 15 FRACCIÓN VII, 16 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 116 Y 117 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

POR ACUERDO TOMADO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO JURISDICCIONAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. FIRMAN LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA MAGISTRADA DOCTORA ESTELA FUENTES JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE LA SALA SUPERIOR Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, ANTE EL C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I", QUIEN DA FE.

PRESIDENTA

MAG. ESTELA FUENTES JIMÉNEZ

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I"

MTRO. JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO

EL MAESTRO JOACIM BARRIENTOS ZAMUDIO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS "I" DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE PÁGINA ES PARTE INTEGRANTE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO NÚMERO D.A.: 541/2023 DERIVADO DEL RECURSO DE APELACIÓN: RAJ.7505/2023 CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD: TJV-44613/2022, PRONUNCIADA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DE ESTE TRIBUNAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA OCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO. CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN: PRIMERO. En cumplimiento de ejecutoria de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los autos del juicio de amparo directo D.A. 541/2023, SE DEJA INSUBSISTENTE la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitida por este Pleno Jurisdiccional el recurso de apelación RAJ. 7505/2023, derivados del juicio de nulidad TJV-44613/2022. SEGUNDO. Son FUNDADOS los agravios segundo y tercero hechos valer en el recurso de apelación RAJ. 7505/2023 de conformidad con los motivos y fundamentos expresados en el Considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Se REVOCA la sentencia recurrida de once de octubre de dos mil veintidós dictada en los autos del juicio contencioso administrativo TJV-44613/2022, por los motivos y fundamentos precisados en la última parte del considerando SÉPTIMO de la presente resolución. CUARTO. No se SOBRESEE en el juicio, de conformidad con las consideraciones expuesta en el considerando décimo de la presente sentencia. QUINTO. Se DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando Décimo Primero y para los efectos precisados en la parte final del Considerando Décimo Segundo. SEXTO. Se les hace saber a las partes que en contra de la presente resolución podrán interponer los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo. SÉPTIMO. A efecto de garantizar debidamente el derecho humano de acceso a la justicia, en caso de duda las partes pueden acudir ante la Magistrada Ponente, para que les explique el contenido y los alcances de la presente resolución. OCTAVO. Por oficio, remítase copia autorizada de la presente resolución al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como constancia del cumplimiento que se da a la ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo D.A. 541/2023. NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes y por oficio acompañado de copia autorizada de la presente sentencia, devuélvase a la Sala de Origen el expediente del juicio de nulidad TJV-44613/2022 y en su oportunidad, archívense los expedientes de los presentes recursos de apelación, como asuntos total y definitivamente concluidos."

SIN TEXTO